CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite y Digitalización de Documentos
23 FEB 2023
RECIBIDO
Firma ..... Hora 1:00 pm

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 1399/2021-CR, 1556/2021-CR, 1569/2021-CR, 1906/2021-CR, 3457/2022-CR, 3723/2022-CR, 3756/2022-CR Y 4007/2022-CR, EN VIRTUD DEL CUAL SE PROPONE LA LEY QUE MODIFICA LA LEY 29719, LEY QUE PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, A FIN DE FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023

Señor Presidente:

Han sido remitidas para estudio y dictamen de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte las siguientes iniciativas legislativas:

PROYECTO DE LEY	PROPONENTE	GRUPO PARLAMENTARIO	DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA
1399/2021-CR	María Grimaneza Acuña Peralta	Alianza Para el Progreso	Ley que amplía el campo de acción y tratamiento de los psicólogos en centros educativos a trastornos y enfermedades producidas por efectos de emergencias sanitarias y desastres naturales
1556/2021-CR	Noelia Rossvith Herrera Medina	Renovación Popular	Ley que modifica el artículo 3 de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas
1569/2021-CR	Eduardo Salhuana Cavides	Alianza Para el Progreso	Ley de lineamientos para la gestión de tutoría, orientación educativa y prevención de riesgo en el marco de la diversidad
1906/2021-CR	Víctor Raúl Cutipa Ccama	Perú Libre	Ley que modifica los artículos 3 y 13 de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas
3457/2022-CR	Alejandro Soto Reyes	Alianza para el Progreso	Ley que modifica la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en instituciones educativas
3723/2022-CR	Alejandro Soto Reyes	Alianza para el Progreso	Ley que modifica la Ley 28719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, garantizando la presencia de psicólogos mediante SERUMS
3756/2022-CR	Jhakeline Katy Ugarte Mamani	Bloque Magisterial de Concertación Nacional	Ley que fortalece los alcances de la Ley 29719, ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas
4007/2022-CR	Jhakeline Katy Ugarte Mamani	Bloque Magisterial de Concertación Nacional	Ley que modifica la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia en las instituciones educativas a fin de que los directores recurran a herramientas

			tecnológicas y queden facultados para instalar cámaras de videovigilancia y así combatir el acoso escolar

El presente dictamen fue aprobado por unanimidad en la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, celebrada el 7 de febrero de 2023.

Congresistas que votaron a favor[1]: Echaíz de Núñez Izaga, Quispe Mamani, María del Pilar Cordero Jon Tay[2], Huamán Coronado, Infantes Castañeda, Ramírez García[3], Cruz Mamani, Rivas Chacara, Chiabra León, Paredes Gonzales, Gutiérrez Ticona, Herrera Medina, Elías Ávalos, Medina Minaya, Marticorena Mendoza y Pablo Medina (miembros titulares), y Revilla Villanueva[4] (miembro accesitario)".

I. SITUACIÓN PROCESAL

1. 1. Antecedentes procesales

Los proyectos de ley fueron decretados e ingresaron a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte conforme se aprecia en la tabla siguiente:

PROYECTO DE LEY	FECHA DE PRESENTACIÓN	FECHA DE DECRETO E INGRESO A LA COMISIÓN	COMISIÓN
1399/2021-CR	03/03/2022	04/03/2022	Educación, Juventud y Deporte
1556/2021-CR	29/03/2022	01/04/2022	• Educación, Juventud y Deporte • Presupuesto y Cuenta General de la República
1569/2021-CR	31/03/2022	01/04/2022	Educación, Juventud y Deporte
1906/2021-CR	28/04/2022	04/05/2022	Educación, Juventud y Deporte
3457/2022-CR	04/11/2022	07/11/2022	Educación, Juventud y Deporte
3723/2022-CR	01/12/2022	05/12/2022	• Educación, Juventud y Deporte

[1] Finalizada la sesión, la congresista Karol Ivett Paredes Fonseca, mediante Oficio 535-2022-2023/KPF-CR, del 8 de febrero de 2023, dejó constancia de su voto a favor.
[2] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[3] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[4] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.

			• Salud y Población
3756/2022-CR	12/12/2022	13/12/2022	Educación, Juventud y Deporte
4007/2022-CR	16/01/2023	18/01/2023	Educación, Juventud y Deporte

Las iniciativas legislativas materia del presente dictamen cumplen con los requisitos generales y específicos señalados en los artículos 75, 76 y 77 del Reglamento del Congreso de la República, por lo cual se realizó el estudio correspondiente.

1.2. Contenido de las iniciativas legislativas y exposición del problema que se pretenda resolver

a) Proyecto de Ley 1399/2021-CR

La presente iniciativa legal fue presentada por la congresista María Grimaneza Acuña Peralta y tiene como finalidad ampliar el campo de acción y de tratamiento de los psicólogos, que debe existir en los centros educativos, según lo prescrito por la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas.

En ese sentido, en cuanto al artículo 3 de la mencionada Ley 29719, que, entre otras cosas, dispone la implementación de por lo menos un profesional de psicología en cada institución educativa para que tenga a su cargo la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre los alumnos, la iniciativa normativa bajo comentario propone incluir en su facultad de prevención y tratamiento los trastornos o enfermedades causados por hechos relativos a las emergencias sanitarias o a los desastres naturales.

De acuerdo con su exposición de motivos, el fundamento de esta propuesta radica en que los niños y adolescentes, además de enfrentar los conflictos propios de su edad, sufren una afectación psicológica, debido al confinamiento y al encierro prolongados como consecuencia de las medidas sanitarias impuestas por el Estado.

Según la citada exposición de motivos, existe evidencia científica que siguiere que las mencionadas medidas sanitarias, así como las clases virtuales, habrían causado en los niños y adolescentes una ausencia de socialización, un aumento del estrés y algunos trastornos que generarían daños en su salud emocional,

máxime si ahora enfrentan el necesario retorno a la presencialidad en los centros educativos.

b) Proyecto de Ley 1556/2021-CR

Esta propuesta normativa fue presentada por la congresista Noelia Rossvith Herrera Medina y, a través de la participación de las asociaciones de padres de familia, tiene como objeto, por un lado, contribuir a la salud mental de la población escolar, y, por otro, la disminución de los índices de acoso escolar (*bullying*) y suicidio adolescente.

Así, respecto del artículo 3 de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, que, entre otras cosas, dispone que la implementación de por lo menos un profesional de psicología en cada institución educativa tiene como plazo máximo el mes de diciembre de 2012, la iniciativa normativa bajo comentario propone ampliar dicho plazo hasta el mes de diciembre de 2026.

Asimismo, pretende introducir la imposición de sanciones administrativas como consecuencia del incumplimiento de lo señalado en el referido artículo 3, tanto para los docentes como para las instituciones educativas, en cuyo último caso se propone el monto equivalente a 10 Unidades Impositivas Tributarias.

Finalmente, esta propuesta normativa busca habilitar a las instituciones educativas públicas y privadas a coordinar con las asociaciones de padres de familia, bajo los alcances de la Ley 28628, Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas públicas.

Este conjunto de propuestas se cimenta en la constatación de que, de acuerdo con la exposición de motivos de este proyecto de ley, más del 89% de los colegios a nivel nacional no cuenta con un psicólogo, debido a la falta de presupuesto y del desconocimiento de la importancia del rol del psicólogo en el colegio, sobre todo si se tiene en cuenta que la salud mental y emocional son presupuestos para lograr un aprendizaje óptimo.

c) Proyecto de Ley 1569/2021-CR

El presente proyecto de ley fue presentado por el congresista Eduardo Salhuana Cavides y tiene por objeto promover y fortalecer el desarrollo integral y el

bienestar de los estudiantes mediante la tutoría y la orientación educativas (que constituyen un proceso de acompañamiento socio-afectivo y cognitivo), garantizando de esta manera su salud holística, en un contexto de atención a la diversidad, priorizando la prevención de riesgos.

Esta propuesta normativa tiene una vocación de omnicomprensión en tanto busca que sea aplicable al Ministerio de Educación, así como a las direcciones regionales de educación de todos los gobiernos regionales, a las unidades de gestión educativa locales (UGEL) y a las instituciones de educación básica a nivel nacional.

A fin de viabilizar el objeto de este proyecto de ley este propone en su artículo 4 la restitución en el Ministerio de Educación de la antigua Dirección Nacional de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar (DITOECE), la misma que contaría con dos subdirecciones: i) la Subdirección Nacional de Tutoría y Orientación Educativa y prevención de riesgo, y, ii) la Subdirección Nacional para la convivencia y disciplina escolar.

El mismo artículo señala que la Subdirección Nacional de Tutoría y Orientación Educación y Prevención de Riesgo tendrá como funciones, en primer lugar, la implementación, cumplimiento y supervisión de lo dispuesto en el proyecto de ley bajo comentario, y, en segundo lugar, garantizar que en todas las instituciones educativas de la educación básica regular, tanto en los turnos de mañana como en la tarde, así como en la educación básica alternativa, y en el nocturno, se designen antes del inicio del año escolar a los denominados "Especialistas Promotores de Tutoría y Orientación Educativa". La propuesta legislativa precisa que el régimen laboral de estos especialistas será el establecido en la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, o, en su defecto, cualquier otra que le la derogue o reemplace.

Por su parte, en el artículo 9 el proyecto de ley las direcciones de educación regional y las unidades de gestión educativa (o quien haga de sus veces) deberán contar cada una con un coordinador en tutoría y orientación educativa y convivencia escolar, cuya labor será a tiempo completo y a dedicación exclusiva. Su designación deberá ser hecha mediante concurso público.

En cuanto a los especialistas promotores de tutoría y orientación educativa, el artículo 10 del proyecto de ley los define como "profesionales multidisciplinarios (profesional en educación, psicología, trabajo social u otro de las ciencias

sociales u afines), cuyas funciones son asesorar, acompañar y monitorear la acción tutorial. Sin embargo, este artículo precisa que aquellos no son ni personal administrativo ni personal docente.

Asimismo, se indica que dentro de sus funciones se encuentran el desplazamiento de un centro educativo a otro mediante el control de desplazamiento de instituciones educativas a su cargo. Por esta razón, y teniendo en cuenta las distancias entre cada centro educativo, no se les puede imponer sanciones tales como, por ejemplo, incumplimiento injustificado del horario de trabajo o incumplimiento de la jornada de trabajo, a los especialistas en caso llegaran tarde a un centro educativo.

Finalmente, mediante dos disposiciones complementarias transitorias, la iniciativa legislativa propone la modificación de dos leyes. En efecto, la Primera Disposición Complementaria Transitoria propone modificar la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, mediante la incorporación en el artículo 76, que regula las reglas de la contratación de docente, la excepción según la cual "(...) podrán ser contratados profesionales multidisciplinarios para cumplir las funciones de Especialistas Promotores de Tutoría y Orientación Educativa y profesionales de convivencia escolar, en las Unidades de Gestión Educativa Local". (*sic.*)

La Segunda Disposición Complementaria Transitoria dispone la modificación de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, mediante la incorporación de nuevos supuestos respecto al tipo de profesionales que conforman el equipo disciplinario, añadiendo a los psicólogos educativos, los psicoterapeutas o los trabajadores sociales en cada institución educativa.

d) Proyecto de Ley 1906/2021-CR

La presente iniciativa legislativa fue presentada por el congresista Víctor Raúl Cutipa Ccama y tiene como objetivo ampliar el campo de acción y tratamiento de los psicólogos que debe haber obligatoriamente en los centros educativos para la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre los alumnos, así como de los trastornos o las enfermedades que pudieran provocarse como consecuencia de hechos de emergencias sanitarias o desastres naturales.

Así, respecto del artículo 3 de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, que, entre otras cosas, dispone que la implementación de por lo menos un profesional de psicología en cada institución educativa tiene como plazo máximo el mes de diciembre de 2012, la iniciativa normativa bajo comentario propone ampliar dicho plazo hasta el mes de diciembre de 2025.

Asimismo, la propuesta normativa pretende la adición de un párrafo *in fine* en el referido artículo 3 incorporando la participación, tanto en las instituciones públicas y privadas, de las asociaciones de padres de familia con la finalidad de cumplir el objeto del citado artículo. Para ello, señalan que la base legal de tal incorporación es la Ley 28628, Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas públicas, y el literal d) del artículo 72 de la Ley 28004, Ley General de Educación.

Finalmente, propone añadir en el artículo 13 de la mencionada ley el deber según la cual toda institución educativa, sin perjuicio de su obligación de entregar al inicio del año escolar a los estudiantes y a los padres de familia un boletín informativo sobre la proscripción de todo tipo de violencia escolar, debe promover la colocación de señaléticas en lugares visibles con mensajes contra el acoso escolar.

De acuerdo con su exposición de motivos, el acoso escolar (*bullying*), en tanto manifestación de la cultura de la violencia en nuestro país, tiene consecuencias nocivas para la salud mental de los niños y adolescentes. Más específicamente, tenemos que, siguiendo a la mencionada exposición de motivos, de a totalidad de casos de *bullying*, entre el año 2020 hasta el mes de abril de 2021 hubo un 54% de casos de *cyberbullying* y un 46% caso de acoso dentro de la institución escolar.

Luego de que, en virtud de la Ley 30797, Ley que promueve la educación inclusiva, el profesional en psicología ingresara de la comunidad educativa, el reinicio de las clases presenciales a nivel nacional ha resaltado la importancia de que cada colegio cuente con un profesional de psicología. Empero, el plazo para que cada una de las instituciones educativas cuenten con por lo menos un profesional en psicología establecido en el artículo 3 de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones, se encuentra venido en exceso. De ahí que sea importante extender dicho plazo hasta el año 2025.

Finalmente, la continuidad de los casos registrados de *bullying* evidencia —sostiene el proyecto de ley bajo comentario— que la entrega al inicio de cada año escolar de un boletín informativo que difunda la prohibición del acoso escolar sea insuficiente. Por lo tanto, se propone que las instituciones públicas y privadas promuevan la colocación de señaléticas en lugares visibles con mensajes en contra del *bullying*.

e) Proyecto de Ley 3457/2022-CR

La presente proposición legal tiene por objeto modificar la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, mejorando las acciones de prevención de violencia escolar. Con dicha finalidad se propone modificar el artículo 3 de la referida ley declarando de necesidad la designación de, al menos, un profesional de psicología en cada institución educativa, quien estará encargado de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y violencia entre los alumnos, y cuyas funciones serán definidas por el Ministerio de Educación, para lo cual se dispone una implementación progresiva cuyo plazo concluye en diciembre de 2027.

Asimismo, se propone incorporar en la referida ley el artículo 14 a fin de que se disponga que los directores deberán publicar carteles en las instalaciones de sus respectivas instituciones educativas para generar conciencia sobre el acoso y violencia entre los alumnos.

De acuerdo con su exposición de motivos, la propuesta de ley se fundamentaría en la obligación del Estado de proveer una educación básica de calidad en la que las relaciones de convivencia se produzcan sin alteraciones, toda vez que el *bullying* o violencia entre los estudiantes se ha convertido en un serio problema social que llegado a tener consecuencias fatales. Finalmente, en su análisis costo-beneficio esta propuesta normativa afirma que la implementación de la ley no representa gastos adicionales al erario nacional.

f) Proyecto de Ley 3723/2022-CR

Este proyecto de ley busca incorporar el artículo 3-A a la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, garantizando la presencia de profesionales psicólogos mediante el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud – SERUMS, con la finalidad de mejorar la prevención de la violencia escolar en las instituciones educativas públicas. La única

disposición complementaria final establece que el Poder Ejecutivo tiene un plazo no mayor a 120 días calendario a partir de la publicación de la Ley para actualizar su reglamento.

La propuesta sostiene que el *bullying* o violencia entre los estudiantes se ha convertido en un serio problema social, dado que tiene preocupantes consecuencias que han significado perder vidas de estudiantes. Por lo expuesto, la exposición de motivos plantea que la actualización de la ley es necesaria para prevenir estos actos. Finalmente, en el análisis costo-beneficio se argumenta que los estudiantes contarán con profesionales que los apoyarán para prevenir la violencia escolar y en las instituciones educativas habrá mejor convivencia social.

g) Proyecto de Ley 3756/2022-CR

Este proyecto de ley tiene por finalidad modificar los artículos 1, 6, 7, 10 11 y 12 de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, para fortalecer las disposiciones actuales orientadas a combatir el avance de la violencia dentro de las instituciones educativas, e incorporar en ella el artículo 14.

La propuesta de ley propone incorporar al acoso virtual y al *ciberbullying* como supuestos de violencia entre los alumnos de las instituciones educativas. Asimismo, propone que será parte de las obligaciones de los docentes realizar el respectivo monitoreo de los alumnos involucrados en los hechos de violencia y de acoso. En la misma línea, se propone que el director disponga la ejecución de las acciones orientadas a fomentar la convivencia sin violencia en las entidades educativas.

Además, se propone que cada institución educativa deberá llevar un libro de registro de incidencias sobre violencia y acoso entre los estudiantes, el cual estará a cargo del director y tendrá anotado todos los hechos de violencia, de intimidación, de hostigamiento, de discriminación, de difamación y de cualquier otra manifestación que constituya acoso, acoso virtual o *ciberbullying.*

De otro lado, se propone, por un lado, que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) esté facultado para imponer multas desde 01 hasta 10 UIT a quienes incumplan lo desarrollado en el reglamento de la Ley 29719, y, por otro, que el incumplimiento

de lo establecido en la ley y su reglamento sea sancionado en la vía administrativa, civil y/o penal, según corresponda.

En su exposición de motivos la iniciativa legislativa señala que su contenido se enmarcar en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3-A, 4 y 18 de la Constitución Política del Perú, así como en los prescrito en el Decreto Supremo N° 008-2021-MIMP y en la Convención de los Derechos del Niño. Finalmente, en su análisis costo-beneficio indica que la iniciativa legislativa no irroga gastos adicionales al erario nacional en la medida en que no se propone la creación de nuevas funciones sino su complementación y fortalecimiento.

h) Proyecto de Ley 4007/2022-CR

Esta iniciativa legislativa tiene por objeto modificar el artículo 7 de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, obligando a las instituciones educativas a recurrir a herramientas tecnológicas para reforzar la seguridad en el entorno escolar, prevenir y combatir el acoso escolar. En ese sentido, se propone facultarle a realizar las gestiones para instalar cámaras de videovigilancia en las zonas comunes de las instituciones educativas, sin vulnerar la intimidad de las personas. Para tal fin se propone que las instituciones educativas puedan realizar convenios con el sector público y/o privado.

Como Única Disposición Complementaria Final, establece que el Poder Ejecutivo actualiza el reglamento de la Ley 29719 en un plazo no mayor a 90 días calendario contados a partir de la publicación de la Ley.

En su exposición de motivos señala que en el año 2013 la Institución Educativa Scipión Llona, del distrito de Miraflores, y la Institución Educativa Pedro Labarthe, en el distrito de La Victoria, ya contaban con cámaras de videovigilancia en el año 2013. Asimismo, en el año 2017, la Municipalidad de Magdalena del Mar emitió una ordenanza municipal para que las instituciones educativas de la referida jurisdicción instalen cámaras de videovigilancia e implementen un sistema de monitoreo con el objeto de prevenir y detectar casos de violencia, *bullying* e inseguridad entre la población escolar.

En ese sentido, se argumenta que la instalación de cámaras de videovigilancia constituye una herramienta de disuasión para los casos de violencia escolar a fin de que las instituciones educativas tomen acciones sobre el fenómeno del

bullying, así como respecto del involucramiento de la víctima, del agresor y de sus respectivas familias.

Finalmente, en su análisis costo-beneficio la propuesta legislativa menciona que ella no genera gasto al erario nacional, toda vez que lo dispuesto se puede implementar a través de la suscripción de convenios con las municipalidades distritales, el sector privado o incluso con los padres de familia.

1.3. Opiniones ciudadanas y técnicas solicitadas y recibidas

1.3.1. Opiniones e información solicitadas

Se efectuaron pedidos de opinión o información a las siguientes instituciones:

PROYECTO DE LEY	OFICIO	INSTITUCIÓN	FECHA
1399/2021-CR	514	Ministerio de Educación	07/03/2022
	515	Ministerio de Salud	
	516	Colegio Médico del Perú	
	517	Colegio de Psicólogos del Perú	
1556/2021-CR	571	Ministerio de Educación	05/04/2022
	572	Colegio de Psicólogos del Perú	
	573	Consejo Nacional de Educación	
	574	Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú	
1569/2021-CR	575	Ministerio de Educación	05/04/2022
	576	Instituto de Investigación en Población	
	577	Coordinadora Nacional Pro Familia - CONAPFAM	
	578	Asociación Civil Padres en Acción	
	580	Coordinadora Regional por la Vida – CORVIDA	
1906/2021-CR	675	Ministerio de Educación	20/05/2022
	676	Ministerio de Salud	
	677	Colegio de Psicólogos del Perú	
	678	Consejo Nacional de Padres y APAFAS del Perú	
3457/2022-CR	702	Presidencia del Consejo de Ministros	11/11/2022
	703	Ministerio de Educación	
	704	Consejo Nacional de Educación	
	70	Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	
3723/2022-CR	871	Presidencia del Consejo de Ministros	16/09/2022
	872	Ministerio de Educación	
	873	Ministerio de Salud	

	874	Colegio de Psicólogos del Perú	
	875	Colegio de Psicólogos de Lima	20/12/2022
	876	Ministerio de Educación	
3756/2022-CR	904	Presidencia del Consejo de Ministros	
	905	Ministerio de Educación	
	906	Consejo Nacional de Educación	
	907	Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa	
	908	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual	
	910	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	
4007/2022-CR	1106	Ministerio de Educación	26/01/2023
	1107	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	
	1108	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	
	1109	Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	
	1110	Consejo Nacional de Educación	
	1111	Defensoría del Pueblo	
	1112	Colegio de Psicólogos del Perú	
	1113	Colegio de Profesores del Perú	
	1114	Asociación de Colegios Privados de Asociaciones Culturales	
	1115	Asociación de Colegios Particulares Amigos	
	1116	Asociación de Colegios Privados de Lima	
	1117	Asociación de Instituciones Educativas Católicas	
	1118	Asociación de Colegios IB Perú	

1.3.2. Opiniones recibidas

1.3.2.1. Opiniones recibidas respecto del Proyecto de Ley 1399/2021-CR

a) Opinión institucional del Ministerio de Educación

Mediante el Oficio N° 00209-2022-MINEDU/DM el Ministerio de Educación remite su opinión institucional contenida en el Informe N° 00383-2022-MINEDU/SG-OGAJ, indicando que el Proyecto de Ley N° 1399/2021-CR no es viable, pues ya sus propuestas de modificación se encuentran reguladas. En efecto, el Decreto Supremo N° 007-2021-MINEDU, que aprobó el Reglamento de la Ley 20844, Ley General de Educación, establece que en el caso de trastornos o enfermedades sufridas por el alumno este deberá ser derivado a los servicios especializados y/o complementarios del sector salud, debiendo el tutor

realizar labor de acompañamiento y seguimiento. Por lo tanto, no corresponde dicha atención especializada al psicólogo educativo.

b) Opinión institucional del Colegio de Psicólogos del Perú

Mediante el Oficio Nº 0130-2022/2024-CPsP-CDN/DECANATO NACIONAL el Colegio de Psicólogos manifiesta su "opinión favorable toda vez que modifica el artículo 3 de la Ley N° 29719 -Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas (Ley Antibullying)."

1.3.2.2. Opiniones recibidas respecto del Proyecto de Ley 1556/2021-CR

a) Opinión institucional del Ministerio de Educación

Mediante el Oficio 449-2022-MINEDU/DM el Ministerio de Educación remite su opinión institucional contenida en el Informe N° 00937-2022-MINEDU/SG-OGAJ, indicando que el proyecto de ley bajo comentario no es viable porque no existen por lo menos dos condiciones básicas para ello. Estas condiciones son:

i) El número de profesionales psicólogos en el país no es suficiente para cumplir la obligación que esta iniciativa legislativa impone.
ii) No se tiene el financiamiento requerido para dicha contratación.

Frente a esta imposibilidad, la propuesta de ley produciría que los directores y las instituciones educativas sean sancionadas injustamente.

b) Opinión institucional del Consejo Nacional de Educación

Mediante el Oficio N° 080-2022-CNE el Consejo Nacional de Educación remite su opinión institucional manifestando que Proyecto de Ley N° 1556/2021-CR no es viable, puesto que el sistema educativo nacional no podrá cumplir con lo señalado en dicha iniciativa legislativa porque no existe el personal suficiente y porque carece de presupuesto para contratar más profesionales.

1.3.2.3. Opiniones recibidas respecto del Proyecto de Ley 1569/2021-CR

a) Opinión institucional del Instituto de Investigación en Población

Mediante el Oficio N° 004-2022-IIP el Instituto de Investigación en Población remite su opinión institucional contenida en el Informe N° 004-2022-IIP, según la cual el proyecto de ley bajo comentario vulnera los artículos 6, 79 y el inciso 17 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, por lo que recomienda su archivo.

b) Opinión institucional del Consejo Nacional de Educación

Mediante el Oficio N°061-2022-CNE el Consejo Nacional de Educación remite su opinión institucional respecto del Proyecto de Ley 1569/2022-CR, la cual no es favorable. Esta institución basa su opinión en el hecho de que la propuesta bajo comentario versa sobre un tema de competencia exclusiva del Ministerio de Educación, órgano rector del sector y, además, porque pretende regular un aspecto técnico mediane una ley.

c) Opinión institucional del Ministerio de Educación

Mediante el Oficio 00452-2022-MINEDU/DM el Ministerio de Educación remite su opinión institucional contenida en el Informe N° 00944-2022-MINEDU/SG-OGAJ, indicando que el contenido de la propuesta normativa ya se encuentra regulada, en buena cuenta, en el documento normativo denominado "Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa para la Educación Básica", aprobado mediante la Resolución Viceministerial N° 212-2020-MINEDU.

Asimismo, señala que actualmente el Ministerio de Educación ya contempla en sus funciones el desarrollo de la tutoría y la orientación educativa. Además, menciona que el cargo de coordinador en tutoría y la orientación educativa ya se encuentra reconocido como parte de la Carrera Pública Magisterial en el artículo 12 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, esto es, su ingreso se encuentra ya regulado mediante el concurso de acceso y encargatura.

Finalmente, menciona que la creación del cargo de Especialistas Promotores de Tutoría y Orientación Educativa como parte de la Carrera Pública Magisterial se contradice con lo dispuesto en el numeral 18.1 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial.

1.3.2.4. Opiniones recibidas respecto del Proyecto de Ley 1906/2021-CR

a) Opinión institucional del Ministerio de Educación

Mediante el Oficio 00494-2022-MINEDU/DM el Ministerio de Educación remite su opinión institucional contenida en el Informe N° 01045-2022-MINEDU/SG-OGAJ, indicando que la incorporación de un profesional en psicología en las instituciones educativas ya se encuentra regulada mediante la Ley 30797, Ley que promueve la Educación Inclusiva, así como en el Decreto Supremo N° 007-2021-MINEDU, Decreto Supremo que modifica el reglamento de la Ley 2804, Ley General de Educación.

Asimismo, la propuesta legislativa ya se encontraría regulada en la Resolución Ministerial N° 451-2014-MINEDU, que creó el "Modelo de Servicio Educativo Jornada Escolar Completa", así como en la Resolución Viceministerial N° 326-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada "Disposiciones para la implementación del Modelo de Servicio Educativo Jornada Escolar Completa JEC para las Instituciones Educativas Públicas del nivel de educación secundaria".

Finalmente, señala que el Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU aprobó los "Lineamientos para la gestión de convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes", el cual contempla medidas de prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, lo cual puede comprender ese tipo de difusión.

b) Opinión institucional del Colegio de Psicólogos del Perú

Mediante el Oficio Nº 0224-2022/2024-CPsP-CDN/DECANATO NACIONAL el Colegio de Psicólogos manifiesta su opinión favorable, toda vez que considera urgente y necesaria la presencia del psicólogo en las instituciones educativas a fin de que se encarguen de la prevención y del tratamiento del *bullying*.

1.3.2.5 Opiniones recibidas sobre el Proyecto de Ley 3457/2022-CR

a) Opinión institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros

La Presidencia del Consejo de Ministros mediante el Oficio N°D003073-2022-PCM-SG, de fecha 16 de noviembre de 2022, remite opinión institucional sobre el proyecto de ley en comentario, la cual concluye que no tiene competencia para opinar sobre la materia que se pretende legislar.

b) Opinión institucional del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa mediante el Oficio N°000652-2022-SINEACE/P, de fecha 23 de noviembre de 2022, informa a esta comisión que no tiene competencia para emitir opinión institucional sobre el proyecto de ley; sin embargo, observa que, a pesar de que su análisis costo-beneficio indica que no genera un gasto adicional al erario nacional, la implementación de las acciones previstas traen consigo una distribución de recursos que deberá evaluar el Ministerio de Educación.

c) Opinión institucional del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación, mediante el Oficio N°00068-2023-MINEDU/SG, de fecha 9 de enero de 2023, señala que la propuesta resulta viable, dado que la designación de un psicólogo en cada institución educativa es importante para la prevención y atención de casos de violencia escolar; sin embargo, se sugiere promover y/o garantizar que dicha disposición se incluya en la Ley de Presupuesto del Sector Público con el objetivo de garantizar la inclusión de dichos profesionales en los gastos programados del Estados. Asimismo, sugiere solicitar información al Colegio de Psicólogos del Perú sobre los profesionales colegiados y habilitados en el marco de la normativa vigente.

Sobre la propuesta de incorporar el artículo 14, precisa que lo dispuesto se enmarca en las campañas establecidas por diversas instituciones educativas para sensibilizar a la comunidad sobre la violencia escolar.

1.3.2.6 Opiniones recibidas sobre el Proyecto de Ley 3723/2022-CR

a) Opinión institucional del Colegio de Psicólogos de Lima

El Colegio de Psicólogos de Lima, mediante el Oficio N°154-2022-CDR-I-CPsP-D, de fecha 20 de diciembre de 2022, manifiesta su opinión favorable sobre la propuesta de incorporar a un profesional en psicología en las instituciones educativas como parte de su SERUMS; sin embargo, advirtió que el referido programa tiene dos modalidades: remunerado (por sorteo) y equivalente (con visita de 3 días a la semana), por lo que sería necesario precisar a cuál de ellas se acogería la propuesta.

b) Opinión institucional del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación, mediante el Oficio N°230-2023-MINEDU/SG, de fecha 20 de enero de 2023, concluye que la iniciativa legislativa es viable; sin embargo, advierte que para asegurar su viabilidad y ejecutabilidad presupuestal y organizativa, se recomienda coordinar con el Ministerio de Salud, por ser la entidad responsable del SERUMS.

1.3.2.7. Opiniones recibidas sobre el Proyecto de Ley 3756/2022-CR

a) Opinión institucional del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa mediante el Oficio N°00003-2022-SINEACE/P, de fecha 6 de enero de 2023, informa a esta comisión que no tiene competencia para emitir opinión institucional sobre el proyecto de ley y sugiere remitirlo al Ministerio de Educación.

b) Opinión institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social mediante el Oficio N°D00017-2023-MIDIS-DM, de fecha 12 de enero de 2023, informa a esta comisión que no tiene competencia para emitir opinión institucional sobre el proyecto de ley y sugiere remitirlo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y adecuar el proyecto de ley, en lo que corresponda, a lo estipulado por el Decreto Supremo N°007-2022-JUS.

c) Opinión institucional del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación, mediante el Oficio N° 155-2023-MINEDU/SG, de fecha 13 de enero de 2023, concluye que la iniciativa legislativa no es viable toda vez que el artículo 6 de la Ley 29719 señala que los actos de violencia se pueden dar a través de medios telefónicos, electrónicos, informáticos, en los que se configura el acoso virtual y ciberbullying, por lo cual resulta innecesaria la modificación planteada al artículo 1.

Asimismo, sobre la modificación del artículo 6 de la Ley 29719, señala que el protocolo de atención a casos de violencia escolar está establecido por el

Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, el mismo que ya incorpora las medidas de seguimiento a los estudiantes involucrados en el acto.

En la misma línea, señala que la incorporación del artículo 14 a la Ley 29719 es innecesaria debido a que ya existen normas específicas que regulan la omisión de las funciones de las autoridades educativas ante la inacción de un hecho de violencia escolar.

1.4 Antecedentes parlamentarios

a) Proyecto de Ley 1654/2012-CR

Este proyecto de ley fue presentado a iniciativa de la congresista Luisa María Cuculiza Torres, integrante del grupo parlamentario Fujimorista, y tiene como objeto modificar el artículo 3 de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia e las instituciones educativas, a fin de declarar de necesidad la designación de por lo menos un profesional de Asistencia Social en cada institución educativa.

Con fecha 06 de noviembre de 2012 esta propuesta normativa fue decreta a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, ingresando formalmente a esta el 08 de noviembre del mismo año. Con fecha 10 de octubre de 2013 fue acumulado en el Pleno del Congreso al dictamen previamente aprobado el 07 de julio de 2012 por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.

Posteriormente, el dictamen fue objeto de sucesivos debates con nuevos textos sustitutorios en el Pleno del Congreso de la República, siendo el último de ellos celebrado el 12 de junio de 2015.

b) Proyecto de Ley 2087/2017-CR

Este proyecto de ley fue presentado a iniciativa de la congresista Paloma Rosa Noceda Chiang, integrante del grupo parlamentario Fuerza Popular, y tiene como objetivo incorporar al trabajador social en los alcances de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia e las instituciones educativas.

Con fecha 08 de noviembre de 2017 este proyecto de ley fue decretado a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, ingresando formalmente el mismo día. Fue debatido el 18 de junio de 2018 por la misma comisión y su dictamen

favorable fue aprobado por mayoría con texto sustitutorio la misma fecha. Finalmente, el 17 de agosto de 2021, por Acuerdo del Consejo Directivo N° 19-2021-2022/CONSEJO-CR, fue enviado al archivo.

c) Proyecto de Ley 4434/2018-CR

La iniciativa legislativa fue presentada por la congresista María Lourdes Alcorta Suero, integrante del Grupo Parlamentario Fuerza Popular el 7 de junio de 2019 y fue decretado el 11 de junio de 2019 a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Por acuerdo del Consejo Directivo N°019-2021-2022/CONSEJO-CR, fue remitida al archivo.

II. MARCO NORMATIVO

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- Convención Americana de Derechos Humanos
- Constitución Política del Perú.
- Ley 28044, Ley General de Educación.
- Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas.
- Ley 30947, Ley de Salud Mental.
- Ley 28369, Ley del Trabajo del Psicólogo.
- Ley 28628, Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas públicas.
- Ley 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación.
- Ley 26549, Ley de los Centros Educativos Privados.
- Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial.
- Ley 30797, Ley que promueve la Educación Inclusiva, modifica el artículo 52 e incorpora los artículos 19-A y 622-A en la Ley 28044, Ley General de Educación.
- Decreto Supremo 010-2012-ED, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas.
- Decreto Supremo N° 007-2021-MINEDU, Decreto Supremo que modifica el reglamento de la Ley N° 2804, Ley General de Educación.

- Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley 2084, Ley General de Educación.
- Decreto Supremo N° 006-2006-ED, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del MINEDU.
- Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación.
- Decreto Supremo N° 005-2021-MINEDU, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica.
- Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos para la Gestión de Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia contra la niñas, niños y adolescentes.
- Decreto Supremo Nº 004-2006-ED, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas privadas.
- Resolución Ministerial N° 451-2014-MINEDU, mediante la cual se crea el "Modelo de Servicio Educativo Jornada Escolar Completa".
- Resolución Viceministerial N° 326-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada "Disposiciones para la implementación del Modelo de Servicio Educativo Jornada Escolar Completa JEC para las Instituciones Educativas Públicas del nivel de educación secundaria".
- Resolución Viceministerial N° 212-2020-MINEDU, que aprueba el documento normativo denominado "Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa para la Educación Básica".
- Resolución Ministerial N° 073-2015-MINEDU, que aprueba el Cuadro de Equivalencias de órganos y unidades orgánicas, en cuyo ítem 9 se prescribía que la Dirección General de Educación Básica Regular.
- Resolución Viceministerial N° 005-2021-MINEDU, que aprueba el documento normativo denominado "Estrategia para el fortalecimiento de la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia en las instancias de gestión educativa descentralizada".

III. ANÁLISIS

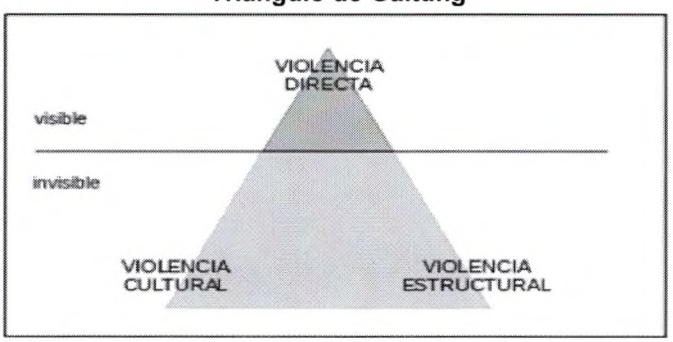
3.1. El estado de la lucha contra el *bullying* en el Perú

El bullying no es un fenómeno aislado, sino que es un tipo de violencia que sucede en el colegio o en las instituciones educativas. De ahí que denominar a

este fenómeno como "violencia escolar" invisibiliza su trasfondo social y cultural, induciendo a interpretarlo como un fenómeno aislado o anecdótico.

Así, Galtung propone para analizar el fenómeno de la violencia en general la metáfora conocida como el triángulo de la violencia.[5] En la parte superior del triángulo está la llamada violencia directa, que es la parte visible pero al mismo tiempo la más pequeña respecto de la violencia invisible: la violencia cultural y la estructural. De acuerdo con este autor, la invisibilidad de la violencia cultural y estructural contribuye a la generación de la violencia directa, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 1
Triángulo de Galtung



Siguiendo al citado autor, la violencia directa es directa porque vemos sus resultados de forma evidente y concreta casi inmediatamente; a veces se representa por la agresión física o verbal entre dos personas o dos grupos. De otro lado, la violencia estructural es la más grave porque afecta al mayor número de personas; en tanto se encuentra presente en las estructuras (físicas, sociales y organizativas) que niegan la satisfacción de las necesidades básicas (libertad, bienestar, identidad, etc.) es la causa de los otros dos tipos de violencia; y es una violencia indirecta, pues tiene su origen en la pobreza, la marginalidad, la injusticia y la inequidad; es, por lo tanto, consecuencia y resultado de la propia estructura social.

[5] Galtung, Johan, Tras la violencia 3R. Reconstrucción. Reconciliación. Resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Gernikar Gorgoratuz, Bilbao, España, 1998. Citado por: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Prevención del acoso escolar: bullying y ciberbullying. Instituto Interamericano de Derechos Humanos: San José, Costa Rica, 2014, p 50.

Finalmente, según el referido autor, la violencia cultural implica actitudes y formas de actuación que se expresan en las creencias, los valores y los modos de pensar, legitimando la violencia directa y estructural e inhibiendo y reprimiendo la respuesta de quienes la sufren. Se trata, en realidad, de una violencia simbólica, que se expresa en la ideología, el lenguaje, la religión, el arte, la educación, entre otros.

En cuanto a la violencia ejercida durante la adolescencia o la juventud, debe considerarse que durante esta etapa de desarrollo psicosocial:

> "los jóvenes construyen la personalidad que los definirá y marcará su vida como personas adultas. [L]os adolescentes se vuelven competitivos, escogen modelos para emular, definen su sexualidad, cuidan su apariencia, entre otras cosas que muchas veces los conducen a competir y entrar en conflicto con las y los demás compañeros y con las personas adultas que les rodean. Es una etapa en la que se tiende a cuestionar la autoridad; también se sufren cambios biológico-hormonales y psicológicos, la autoestima se fortalece, se experimenta la rebeldía y los cambios emocionales se ponen de manifiesto. Se trata de una etapa de transición, de búsqueda y definiciones. La persona adolescente es influenciable y además de centrarse en los eventos del quehacer y cultura de su institución educativa, está alerta a todas las influencias del entorno. Es por ello presa fácil de modas, creencias, valores e ideologías, culturales o anticulturales, que entre otros canales, reciben a través de los diversos medios de comunicación."[6]

En este contexto, la violencia en la institución educativa afecta la cultura, la seguridad, la convivencia pacífica y tiene un impacto negativo en los resultados académicos. No obstante, el acoso escolar no es una consecuencia exclusiva de los factores internos del centro educativo sino que es una extensión o reflejo de la violencia —en sentido amplio— que existe en la sociedad en general, la cual es muchas veces potenciada por los medios de comunicación.[7]

---

[6] Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Prevención del acoso escolar: bullying y ciberbullying. Instituto Interamericano de Derechos Humanos: San José, Costa Rica, 2014, p 50

[7] Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Prevención del acoso escolar: bullying y ciberbullying. Instituto Interamericano de Derechos Humanos: San José, Costa Rica, 2014, p 150.

De otro lado, no debe confundirse los problemas de interrelación entre los adolescentes, derivados de los altibajos propios de su etapa de desarrollo psicosocial, con el *bullying*, cuyas características son las siguientes[8]:

- La indefensión. La persona agredida se encuentra indefensa ante la persona agresora y se considera más débil, ya sea porque realmente lo es o porque reacciona de una manera pasiva e impotente ante los ataques. A veces se le atacará en grupo, lo que reduce aún más sus posibilidades de respuesta ante la agresión.

- La intencionalidad. La forma en que se dan los diferentes tipos de maltrato, las interacciones y las reacciones de los actores, especialmente de la persona agredida, puede ser determinantes para incentivar a la persona agresora, sobre todo si tiene algún liderazgo o notoriedad en el grupo y es reforzada por la reacción de los compañeros.

- La repetitividad. En el *bullying* la agresión no se da de manera aislada, se repite y prolonga durante cierto período.

- La continuidad. El episodio aislado de comportamiento agresivo no puede considerarse acoso.

- El desequilibro de fuerzas. La relación que se da entre el victimario y la víctima es una de imposición de poder, en donde el primero se impone sin que la víctima tenga la oportunidad de defenderse, ya sea porque el victimario no se lo permite o bien por la debilidad que manifiesta.

- El aumento del poder del agresor. En el acoso escolar se percibe de manera clara cómo va aumentando el poder de la persona agresora a medida en que va ejerciéndolo sobre la víctima, la cual se siente cada vez más presionada, vulnerable y aislada.

[8] Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Prevención del acoso escolar: bullying y ciberbullying. Instituto Interamericano de Derechos Humanos: San José, Costa Rica, 2014, p 163.

El bullying, como fenómeno social y psicológico, ha sido abordado desde diferentes perspectivas científicas. A continuación, se resumen las principales teorías que han intentado explicar el acoso escolar en tanto conducta antisocial[9]:

Cuadro 1
Teorías que han intentado explicar las conductas antisociales en general

TEORÍAS	PRINCIPAL REPRESENTANTE	RESUMEN
Teorías psicobiológicas	Teoría de la conducta antisocial	Es una de las más destacables dentro de la concepción psicobiológica, y se basa en la teoría de la personalidad. Relaciona la conducta antisocial con los rasgos de personalidad, así un alto nivel en los rasgos de psicoticismo, extraversión y neuroticismo complica el proceso normal de socialización.
Teorías cognitivo-sociales		Los niños comienzan a aprender las reglas morales de los adultos, pasando por un período de egocentrismo, para después pasar por la etapa del realismo moral y del relativismo moral. El desarrollo inadecuado en la etapa del relativismo moral implica una perturbación en el proceso de socialización que conlleva la conducta delictiva.
Teorías sociológicas	Teoría del aprendizaje social	En el aprendizaje del comportamiento delictivo intervienen cuatro mecanismos interrelacionados: la asociación diferencial con personas que muestran hábitos y actitudes delictivos, la adquisición por el individuo de definiciones favorables al delito, el reforzamiento diferencial de sus comportamientos delictivos y la imitación de modelos prodelictivos.

De otro lado, el bullying es un fenómeno multicausal, pues es el resultado de la convergencia en el espacio y en el tiempo de varios factores endógenos y exógenos. A continuación, presentamos un cuadro que sintetiza dichas causas:

Cuadro 2
Diversidad de causas del *bullying*

CAUSA	EXPLICACIÓN
La personalidad del agresor y del agredido	Nadie la puede negar la influencia que deja la familia en el desarrollo del niño o niña, en el desarrollo de su personalidad y en el futuro del adolescente y adulto. Así, la violencia, especialmente en la modalidad de bullying, puede ocurrir porque existen personalidades proclives, en combinación con los factores ambientales que contribuyen a su desarrollo

[9] Monelos Muñiz, Mª Estrella. Análisis de situaciones de acoso escolar o bullying en centros de Educación Secundaria de La Coruña. Tesis doctoral. Departamento de Filosofía y Métodos de Investigación en Educación. Universidad da Coruña: La Coruña, 2015, p. 60.

La familia	Su influencia es primordial sobre el resto de las relaciones que se establecen con el entorno. Así, un ambiente familiar saludable beneficia a las y los hijos en el desarrollo de su personalidad. Pero no siempre este es el caso, pues el niño puede desarrollar actitudes agresivas como una forma de expresar sus sentimientos ante un entorno familiar poco afectivo, en el que podrían darse diversas situaciones: ausencia del padre o la madre, violencia, abuso o humillación ejercida por los padres, madres, hermanas y hermanos mayores. Se inicia, así, un círculo vicioso y de repetición.
La institución educativa	Se trata sin duda del "segundo hogar" de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, donde continúa la tarea de perfilar la personalidad y el aprendizaje de valores. Cuanto más grande es la institución, menos control y vigilancia hay. Lamentablemente, muchos problemas de *bullying* surgen como consecuencia del efecto Pigmalión, según el cual los estudiantes destacados suelen recibir elogios y el reconocimiento de la o el docente, mientras que los otros reciben censura, crítica y marginamiento, que también son formas de violencia.
Estructura de la organización	La estructura marca la normativa del centro y los comportamientos aceptados en su marco. Estas normas deben ser explícitas, claras y comunicadas a todos los integrantes del centro —docentes, estudiantado, personal administrativo y padres y madres de familia— precisamente para evitar conflictos. Así mismo, previene situaciones de violencia y, eventualmente, de bullying.
Los medios de comunicación	El efecto positivo de los medios de comunicación son la información que transmiten. Su efecto negativo, que no tiene asidero sobre toda la sociedad sino sobre las personas cuya personalidad y educación implican alguna vulnerabilidad, es la repetida exposición a la violencia, que puede producir hábito, hasta llegar al punto de normalizarla, disminuyendo la empatía hacia las víctimas y generando indiferencia.
El entorno social	La violencia es una expresión psicosocial determinada por las condiciones de la vida. La socialización en un contexto donde se dan cotidianamente manifestaciones de violencia, potencia las acciones violentas y la desensibilización frente a sus implicaciones y consecuencias. Toca a la sociedad establecer los respectivos controles y procesos estratégicos y educativos, para que la violencia no continúe multiplicándose: en esto la educación tiene un papel protagónico.

Finalmente, debe resaltarse el hecho de que si bien el Perú es uno de los pocos países de la región que cuenta con una ley antibullying (Ley 29719) y unos lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, todavía existen algunos problemas de diseño y de ejecución que impiden un combate más eficaz a dicho fenómenos social.

En primer lugar, tenemos que las medidas punitivas no solucionan el problema del bullying, sobre todo en un contexto donde este fenómeno se ha normalizado en tanto expresión de la violencia estructural que padece la sociedad peruana.

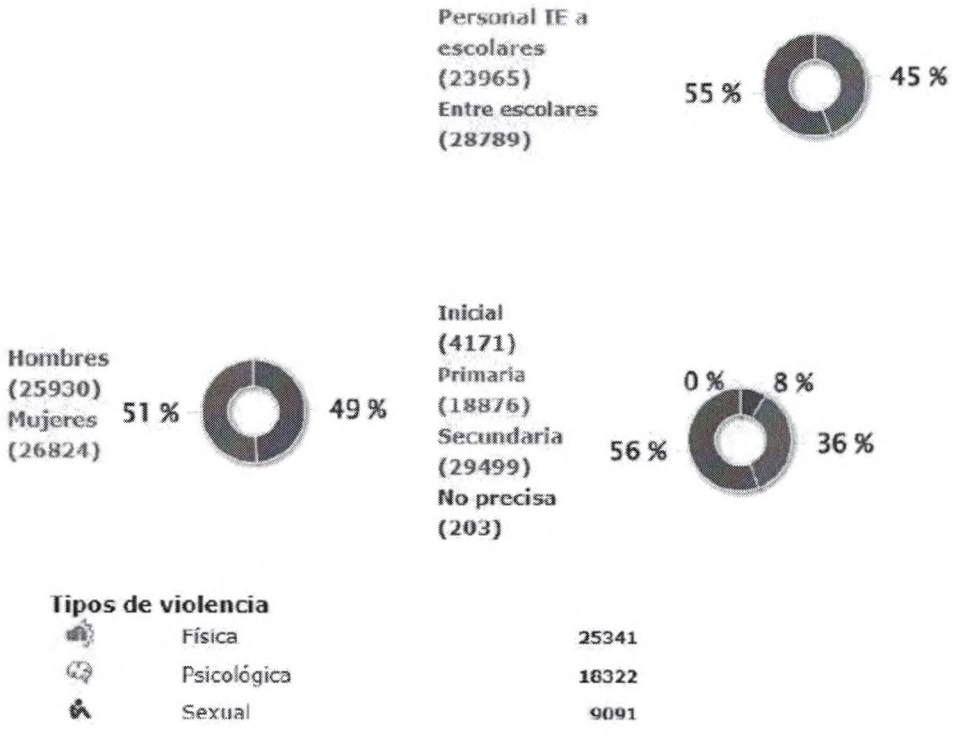
Al respecto, no se cuenta con una medida que implique una intervención con ambas familias y el personal educativo.

Hay una cultura del silencio que se manifiesta no sólo en la invisibilización del bullying por parte de los alumnos sino también —cuando ya no se puede mantener invisible— en el esfuerzo de los colegios a solucionar "internamente" este tipo de casos, a pesar de que la Ley 29719 obliga a los centros educativos públicos y privados a notificar los actos de violencia ante el Ministerio de Educación y el portal SíSeVe.[10]

No se cuenta con el número necesario de psicólogos en los centros educativos, problema que se agrava en este contexto postpandemia, tal como lo mostraremos *infra*. Todas estas medidas han hecho que el *bullying* en nuestro país se mantenga dentro de niveles bajos: 52,754 casos de *bullying* reportados en 10 años. Sin embargo, no debe perderse de vista que siempre hay un subregistro.

[10] Disponible en: http://www.siseve.pe/Web/

Gráfico 2
Número de casos de bullying reportados en el portal SíSeVe (2013-2022)



Fuente: SíSeVe

Sin perjuicio de lo anterior, es de mencionar, por otro lado, que las escuelas tampoco cumplen los protocolos establecidos. De acuerdo con un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo en el que se evaluaron más de mil centros educativos, en el año 2019 más del 40% de los colegios en zonas urbanas a nivel nacional no contaban con medidas para hacer frente al *bullying*.[11]

Lo anterior tiene relación con la cifra de casos de bullying registrada, dado que el Ministerio de Educación, ante la inexistencia de un registro propio, sólo conoce los casos que reporta su plataforma SíSeVe o que llegan a los medios de

[11] La República. El bullying sigue en las aulas: con estrategias insuficientes y la desidia ante esta violencia. Publicado el 16 de marzo de 2022. Disponible en: https://data.larepublica.pe/el-bullying-sigue-en-las-aulas-con-estrategias-insuficientes-y-la-desidia-ante-esta-violencia/

comunicación. De ahí que para este ministerio sea más difícil controlar el cumplimiento de las medidas de prevención antibullying que cada colegio debe implementar.

Finalmente, de acuerdo con un reportaje del diario La República serían los colegios privados los más sancionados por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual por haber incumplido sus obligaciones frente a la prevención del bullying.[12]

3.2. Sobre las propuestas de modificación del artículo 3 de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas

Las propuestas de modificación al artículo 3 de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, aunque persiguen el mismo objetivo, son varias y de distinta naturaleza. Las hemos agrupado por temas, teniendo siempre en consideración que una aproximación comparativa permite apreciar mucho mejor las sutilezas de las propuestas.

En efecto, la actual redacción del artículo 3 de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, prescribe lo siguiente:

> "Artículo 3. Designación de un profesional de Psicología.
> Declárese de necesidad la designación de, por lo menos, un profesional de Psicología en cada institución educativa, encargado de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre los alumnos.
> La implementación de esta disposición se realiza en forma progresiva de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, cuyo plazo concluye en diciembre de 2012.
> El Ministerio de Educación define las funciones de este profesional, en el marco de la orientación, formación y terapia educacional individual o colectiva."

Como se aprecia de la cita anterior, son tres las normas jurídicas que contiene el artículo 3: i) declaración de necesidad pública la designación de por lo menos

[12] La República. El bullying sigue en las aulas: con estrategias insuficientes y la desidia ante esta violencia. Publicado el 16 de marzo de 2022. Disponible en: https://data.larepublica.pe/el-bullying-sigue-en-las-aulas-con-estrategias-insuficientes-y-la-desidia-ante-esta-violencia/

un profesional en psicología en cada institución educativa; ii) el plazo para la implementación de dicha disposición y, iii) la definición de las funciones del profesional de psicología a cargo del Ministerio de Educación. Del análisis de las iniciativas legislativas acumuladas se advierte que existen una o más propuestas legales respecto de cada una de las tres normas mencionadas.

A continuación, analizaremos la viabilidad de las iniciativas legislativas acumuladas en el presente dictamen agrupándolas según busquen modificar una de las normas referidas.

a) Iniciativas legislativas que proponen modificar la norma que declara la necesidad de designación de, por lo menos, un profesional de psicología en cada institución educativa

En cuanto a la norma que declara la necesidad de designación de, por lo menos, un profesional de psicología en cada institución educativa, de los proyectos de ley analizados se tiene que existen dos propuestas legislativas al respecto. La primera busca extender las profesiones o los tipos de profesionales cuya designación debería ser declarada como de necesidad. La segunda pretende extender los supuestos sobre los cuales recaen las funciones de prevención y de tratamiento realizadas por estos profesionales eventualmente designados.

A continuación, presentamos un cuadro comparativo que muestra las propuestas descritas:

Cuadro 3
Cuadro comparativo del artículo 3 de la Ley 29719 y las propuestas legislativas

REDACCIÓN VIGENTE DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 29719	PROYECTO DE LEY 1399/2021-CR	PROYECTO DE LEY 1569/2021-CR
Declárese de necesidad la designación de, por lo menos, un profesional de Psicología en cada institución educativa, encargado de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre los alumnos.	Declárese de necesidad la designación de, por lo menos, un profesional de Psicología en cada institución educativa, encargado de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre los alumnos, **así como trastornos o enfermedades que pudieran provocarse como consecuencia de hechos de emergencias**	Declárese de necesidad la designación de, por lo menos, un profesional de Psicología, **psicología educativa, Psicoterapeuta, o trabajador social**, en cada institución educativa, encargado de la prevención y el tratamiento de os casos de acoso y de violencia entre los alumnos.

	sanitarias o desastres naturales.	

Respecto de la propuesta de extender los supuestos sobre los cuales recaen las funciones de prevención y de tratamiento realizadas por estos profesionales eventualmente designados (Proyecto de Ley 1399/2021-CR), debe considerarse, de acuerdo con esta propuesta, que existirían dos grupos de supuestos de prevención y tratamiento claramente diferenciados entre sí. Por un lado, tenemos los derivados de actos de acoso y violencia entre los alumnos, y, por otro, los trastornos o las enfermedades generadas de hechos relacionados con las emergencias sanitarias o los desastres naturales.

Como se aprecia, mientras que en el primer supuesto estamos ante actos concretos, circunscritos en el tiempo y en el espacio, donde es posible identificar y sancionar a los autores, y cuya solución supone una intervención inmediata en el centro escolar, en el segundo caso nos encontramos frente a consecuencias psicológicas tan graves que constituyen trastornos y enfermedades, cuyo inicio no sucede en el centro de estudios sino que su origen puede ser rastreable a momentos previos al retorno a las clases presenciales y son de naturaleza extraescolar.

En la misma línea, la Ley 30947, Ley de Salud Mental, publicada el 23 de mayo de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", describe claramente estos dos fenómenos. En efecto, el numeral 7 del artículo 5 señala que:

> "Artículo 5. Definiciones
> Para efectos de la presente ley, se entiende por:
> (...)
> 7. Problemas de salud mental. Comprenden:
> a) Problema psicosocial. Dificultad generada por la alteración de la estructura y dinámica de las relaciones entre las personas o entre estas y su ambiente.
> b) Trastorno mental y del comportamiento. Condición mórbida que sobreviene en una determinada persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente y del comportamiento, el organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o

> permanente. Los trastornos mentales a que se refiere la presente ley se encuentran contemplados en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud."

A partir de la información anterior, corresponde preguntarnos, en primer lugar, si los psicólogos tienen la aptitud profesional para tratar adecuadamente este tipo de trastorno o de enfermedad; en segundo lugar, si la realidad infraestructural (capacidad instalada) de los centros educativos nacionales (públicos o privados) permitiría la realización de las labores de los psicólogos en este tipo de casos. Finalmente, cabe preguntarnos si el diseño institucional de sistema educativo peruano ha previsto o no una respuesta institucional para afrontar este tipo de casos.

Al respecto, conviene tener en consideración lo señalado en la opinión institucional que al respecto emitió oportunamente el Ministerio de Educación, según la cual el tratamiento de trastornos y enfermedades dentro de las instituciones educativas debe mirarse desde la perspectiva de los objetivos de la educación básica. Así, el artículo 31 de la Ley 28044, Ley General de Educación, señala lo siguiente:

> "Artículo 31.- Objetivos
> Son objetivos de la Educación Básica:
> a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país.
> b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo largo de toda su vida.
> c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías."

En ese sentido, no se advierte, dentro de los objetivos de la educación básica, la prevención y el tratamiento de los trastornos o de las enfermedades generadas de hechos relacionados con las emergencias sanitarias o los desastres naturales. Por el contrario, tal como lo señala la opinión institucional mencionada, "la escuela es fundamentalmente un espacio pedagógico, orientado al logro de los aprendizajes y a la formación integral de los estudiantes."

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en consideración que, de acuerdo con el artículo 39 del reglamento de la precitada Ley 28044, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 007-2021-MINEDU, el cual describe indubitablemente a quién le corresponde realizar la labores especializadas y complementarias.

> "Artículo 39.- Tutoría y orientación educativa
> La tutoría y orientación educativa es el acompañamiento socioafectivo y cognitivo de los estudiantes. Es un servicio inherente al currículo y tiene las líneas de acción formativo, promocional y preventivo. Son agentes de la tutoría y la orientación educativa: el tutor, los docentes, los directivos, el psicólogo/a, auxiliares, responsables de bienestar, las madres y padres de familia, los propios estudiantes, así como los demás actores de la comunidad educativa. (...)
> Las instituciones y programas educativos, o las mismas agrupadas en redes, deberán contar con psicólogos permanentes o itinerantes para apoyar la labor de tutoría y orientación educativa.
> Asimismo, en toda institución educativa, cuando el caso lo requiera, el estudiante es derivado a los servicios especializados y/o complementarios, con un informe de la dirección, sin afectar su asistencia regular a clases. El tutor realiza el acompañamiento y seguimiento al estudiante.
> (...)" (Subrayado nuestro)

En consecuencia, a partir de una lectura concordada del artículo 31 de la Ley 28044, Ley General de Educación, y del artículo 39 de su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 007-2021-MINEDU, es evidente, citando al mencionado informe técnico del Ministerio de Educación, que "(...) si bien las instituciones educativas pueden ser aliados en la prevención y en la detección de las situaciones relacionadas con problemas de salud mental, tanto el tratamiento como la recuperación sanitaria de los estudiantes corresponde al

Sector Salud, a cuyos servicios deberían ser derivados aquellos estudiantes que presenten este tipo de dificultades."

Este es el caso —qué duda cabe— de los estudiantes que requieren una atención especializada como consecuencia de vivir una situación de crisis emocional o mental (generada por la emergencia sanitaria, el confinamiento, un desastre natural, entre otras de similar naturaleza), quienes deberán ser derivados a los servicios especializados correspondientes, que son complementarios a la intervención pedagógica que brinda el sistema educativo.

Cabe resaltar que esta derivación se realiza incluso en el caso de afectación física o psicológica como consecuencia de haber sido víctima de violencia escolar o familiar. No obstante, en todos los casos el acompañamiento socioafectivo y el seguimiento del proceso de atención ante el servicio especializado correspondiente es realizado por el tutor del estudiante derivado. En estos supuestos la labor del psicólogo educativo es apoyar la labor del tutor.

De los argumentos mencionados se desprende que, respecto a la prevención y al tratamiento de los trastornos o de las enfermedades generadas de hechos relacionados con las emergencias sanitarias o los desastres naturales, ni el psicólogo tiene la especialidad correspondiente para ello ni la institución educativa es el lugar para que aquellos se realicen. Asimismo, el diseño institucional del sistema educativo ha previsto que tales acciones se realicen por instituciones, aunque vinculadas, ajenas al sector educación, por lo que tampoco existe —no podría existir—capacidad instalada en los centros educativos para ello. Por lo tanto, este extremo de la propuesta legislativa no es de recibo.

En cuanto a la propuesta de extender las profesiones o los tipos de profesionales cuya designación debería ser declarada como de necesidad (Proyecto de Ley 1569/2021-CR), la Comisión de Educación, Juventud y Deporte se encuentra convencida de que la salud mental de todos los peruanos es de vital relevancia para la continuidad de la sociedad. El cuidado de la salud mental de los niños y de los adolescentes es prioritario para el Estado peruano, tal como lo indica el numeral 1 del artículo 6 de la mencionada Ley 30947, Ley de Salud Mental:

> "Artículo 6. Prioridades en salud mental
> En salud mental, se considera prioritario:

> 1. El cuidado de la salud mental en poblaciones vulnerables: primera infancia, adolescencia, mujeres y adultos mayores, bajo un enfoque de derechos humanos, equidad de género, interculturalidad e inclusión social, que garanticen el desarrollo saludable y la mejor calidad de vida de las personas, familias y comunidades.
> (...)"

Otra forma de fomentar la priorización del cuidado de la salud mental de los niños y de los adolescentes es evitar la sobrerregulación, pues ello podría entorpecer la labor de priorización. En ese sentido, debe considerarse que ya el numeral 4 del artículo 5 de la referida ley señala que en las intervenciones en salud mental participan varios profesionales y que tales intervenciones incluyen acciones de carácter preventivo, tal como se muestra a continuación:

> "Artículo 5. Definiciones
> Para efectos de la presente ley, se entiende por:
> (...)
> 4. Intervención en salud mental. Es toda acción, incluidas las de la medicina y profesiones relacionadas, psicología, enfermería, terapia ocupacional, trabajo social y otras según corresponda, que tengan por objeto potenciar los recursos propios de la persona para su autocuidado y favorecer factores protectores para mejorar la calidad de vida de la persona, la familia y la comunidad. Incluye las acciones de carácter promocional, preventivo, terapéutico, de rehabilitación y reinserción social en beneficio de la salud mental individual y colectiva, con enfoque multidisciplinario.
> (...)" (Subrayado nuestro).

Es decir, el diseño institucional del cuidado de salud mental, respecto de los niños y adolescentes, no sólo prioriza su atención sino que también permite que las intervenciones en salud mental sean realizadas de manera integral, donde prime la multidisciplinariedad, y que tenga, entre otros aspectos, un carácter preventivo. Siguiendo este razonamiento, el artículo 34 de la precitada Ley 30947, Ley de Salud Mental, señala que los programas de prevención en salud mental llevados a cabo en las instituciones educativas (básica y superior, tanto

públicas como privadas) deben ser realizados por los referidos profesionales especializados, tal como se muestra a continuación:

> "Artículo 34. Educación en salud mental
> Las instituciones educativas de la educación básica y de la educación superior, tanto públicas como privadas, implementan programas de prevención con la finalidad de proteger a la población estudiantil de potenciales riesgos para la salud mental. Asimismo, fomentan la inclusión de contenidos curriculares referentes a la prevención de problemas de salud mental y a estilos de vida saludables. Para el efecto, participan profesionales especializados, de acuerdo a los lineamientos que aprueben los ministerios de Salud y de Educación." (*Sic*) (Subrayado nuestro).

En consecuencia, el contenido de la propuesta legislativa bajo análisis ya se encuentra regulado en el mencionado marco legal, por lo que, sobre la base de las razones expuestas y, remitiéndonos *mutatis mutandis* a los argumentos señalados en el apartado anterior, esta comisión concluye que dicho contenido tampoco es de recibo.

b) Iniciativas legislativas que proponen modificar la norma relativa a la duración de la implementación progresiva de la designación de los profesionales en psicología en las instituciones educativas

De otro lado, tenemos las propuestas que buscan extender la duración del plazo de la implementación progresiva de la designación de los profesionales en psicología. En efecto, la norma vigente señala que dicho plazo venció en el mes de diciembre de 2012, mientras que los proyectos de ley 1556/2021-CR, 1906/2021-CR y 3457/2022-CR proponen que venzan en el mes de diciembre de 2026, 2025 y 2027, respectivamente.

La redacción vigente del artículo 3 de la Ley 29719, Ley, señala lo siguiente:

> "Artículo 3. Designación de un profesional de Psicología.
> (...)
> La implementación de esta disposición se realiza en forma progresiva de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, cuyo plazo concluye en diciembre de 2012."

Frente a esta redacción tres proyectos de ley proponen las siguientes fórmulas:

Cuadro 4
Cuadro comparativo entre el artículo 3 de la Ley 29719 y las propuestas legislativas

PROYECTO DE LEY 1556/2021-CR	PROYECTO DE LEY 1906/2021-CR	PROYECTO DE LEY 3457/2022-CR
"Artículo 3. Designación de un profesional en Psicología. (...) La implementación de esta disposición se realiza en forma progresiva de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, cuyo plazo concluye en diciembre de **2026**."	"Artículo 3. Designación de un profesional en Psicología. (...) La implementación de esta disposición se realiza en forma progresiva de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, cuyo plazo concluye en diciembre de **2025**."	"Artículo 3. Designación de un profesional en Psicología. (...) La implementación de esta disposición se realiza en forma progresiva de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, cuyo plazo concluye en diciembre de **2027**."

Del cuadro anterior se advierte que las tres iniciativas legislativas proponen exactamente lo mismo (la ampliación del plazo), excepto respecto del año en que consideran que dicho plazo debe finalizar: una propone el año 2025, el 2026 y el 2027.

En este estado de la exposición es pertinente recordar que el Proyecto de Ley 04493/2010-CR (que acumulaba los proyectos de ley 04400/2010-CR, 04406/2010-CR y 04515/2010-CR) fue exonerado del correspondiente dictamen de comisión por la Junta de Portavoces. De ahí que el respectivo texto sustitutorio fuera objeto de debate y aprobación por el Pleno del Congreso de la República en la sesión de fecha 11 de junio de 2011, dando lugar a que el 25 de junio de 2011 se publicara en el Diario Oficial "El Peruano" la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas.

En ese sentido, del examen de los proyectos de ley mencionados no se advierte que alguno de ellos hubiera propuesta plazo alguno respecto del plazo de implementación progresiva de la designación de profesionales en psicología en las instituciones educativas. Asimismo, de la lectura de la trascripción del Diario de los Debates de la 15° B (Vespertina) de la Legislatura Ordinaria de 2010, celebrada el 11 de junio de 2011, no se advierte alguna razón que justificara la inclusión en el texto sustitutorio de del mes de diciembre de 2012 como plazo final del referido proceso de implementación progresiva.

De otro lado, del examen de las exposiciones de motivos de los proyectos de ley 1556/2021-CR y 1906/2021-CR tampoco se advierten las razones de por qué proponen el año 2026 y 2025, respectivamente. Tampoco adjuntan información de cuántos profesionales en psicología fueron designados hasta el mes de diciembre de 2012 (plazo vigente establecido por la Ley 29719) ni de las razones por las cuales, a pesar de que la designación era progresiva y sujeta a la disponibilidad presupuestal, hasta el fin de dicho plazo no se pudo cumplir con los objetivos de la mencionada ley. Lo mismo puede predicarse del Proyecto de Ley 3457/2022-CR.

En todo caso, debemos traer a colación que el artículo 52 de la Ley General de Educación señala que el profesional psicólogo ya forma parte de la comunidad educativa. Asimismo, el artículo 62-A de la misma ley define a la función principal del profesional en psicología es la de "ser un soporte para que los actores de las instituciones educativas orienten adecuadamente a los estudiantes, entre otros, en la comprensión de aspectos relacionados con su desarrollo cognitivo y socioeconómico."

Esto se complementa con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 007-2021-MINEDU, Decreto Supremo que modifica el reglamento de la Ley 2804, Ley General de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que establece que entre las funciones del psicólogo se encuentra la de orientar la atención oportuna de los casos de violencia contra los estudiantes.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante resaltar, siguiendo al informe técnico remitido por el Ministerio de Educación, que la designación (...) debe responder además de la disponibilidad presupuestal, a la oferta de profesionales psicólogos a nivel nacional, quienes además deben cumplir con la colegiatura y habilitación ante el Colegio de Psicólogos del Perú, tal como se establece en la Ley 28369, Ley del Trabajo del Psicólogo (...)".

En ese sentido, cabe remitirnos a lo señalado en el Oficio N° D000421-2022-SG-MINSA, remitido por el Ministerio de Salud a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, en el sentido de que:

> "[t]omando en cuenta el número de instituciones educativas a nivel nacional que según el Portal web del Ministerio de Educación en el año 2021 fue de 106,728, y el número de psicólogos colegiados a nivel nacional que a

> julio del 2022 fueron 46,580 según el portal web del Colegio de Psicólogos del Perú, esto no podría cumplirse. Además, es importante tomar en cuenta que un porcentaje importante de psicólogos trabajan en otros sectores como el de salud, o en el ámbito privado." (sic.)

La información actualizada a la fecha es que existen en nuestro país, según la página web del Colegio de Psicólogos del Perú 47,615 psicólogos colegiados. En cuanto al número de instituciones educativas a nivel nacional se tiene que la cifra actualizada, según la página web oficial del Estado peruano[13], es la misma que la mencionada en la anterior cita. No obstante, y siendo conscientes de la imposibilidad de cubrir todas las instituciones educativas con por lo menos un profesional en psicología, es oportuno saber con cuántos psicólogos cuenta nuestro sistema educativo, máxime si así lo ordena la ley.

En efecto, al respecto debemos tomar en consideración la Resolución Ministerial N° 451-2014-MINEDU, mediante la cual se creó el "Modelo de Servicio Educativo Jornada Escolar Completa" para las instituciones educativas públicas de nivel de educación secundaria, la cual, siguiendo las otras normas mencionadas, prevé contar con un psicólogo en la escuela. En ese sentido, y de acuerdo con la opinión institucional emitida por el Ministerio de Educación en el Informe N° 01045-2022-MINEDU/SG-OGAJ, y sobre la base de la Resolución Viceministerial N° 326-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada "Disposiciones para la implementación del Modelo de Servicio Educativo Jornada Escolar Completa JEC para las Instituciones Educativas Públicas del nivel de educación secundaria", actualmente se cuenta con 1623 psicólogos contratados para este modelo educativo.

Por lo tanto, respecto de este extremo de las propuestas legislativas, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte concluye que no son atendibles por las razones antes mencionadas. Sin embargo, esta comisión no puede permanecer indiferente frente a la demanda insatisfecha de profesionales en psicología en los centros educativos.

Por ello, es de recibo la propuesta contenida en el Proyecto de Ley 3723/2022-CR según el cual se pretende que el Poder Ejecutivo disponga, según su

[13] *Vid.* Nota de Prensa: Casi el 90% de Instituciones Educativas Públicas de Lima Provincias carecen de servicio de telefonía. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/contraloria/noticias/590698-casi-el-90-de-instituciones-educativas-publicas-de-lima-provincias-carecen-de-servicio-de-telefonia

disponibilidad presupuestaria, que los profesionales psicólogos realicen el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud - SERUMS en las instituciones educativas públicas. En ese sentido, esta comisión propone una fórmula legal sustitutoria.

c) Iniciativas legislativas que proponen modificar las facultades y las sanciones a los directores de las instituciones educativas, así como habilitarlas a participar activamente en las asociaciones de padres de familia

En este estado de la exposición de motivos corresponde analizar las propuestas que buscan incorporar párrafos al artículo 3 de la precitada Ley 29719. Un primer grupo de propuestas pretende establecer sanciones administrativas a los directores de las instituciones educativas públicas y a las instituciones educativas en general que incumplan lo señalado en el artículo 3.

Un segundo grupo (Proyecto de Ley 4007/2022-CR) propone facultar a los directores de los centros educativos a realizar gestiones para instalar cámaras de videovigilancia en las zonas comunes de la institución educativa, sin vulnerar la intimidad de las personas, pudiendo recurrirse a la suscripción de convenios tanto con entidades del sector público como del privado.

El tercer grupo de propuestas tiene como finalidad habilitar a las instituciones educativas públicas y privadas a participar activamente con las asociaciones de padres de familia a fin de tratar la problemática relativa al acoso escolar.

En cuanto al primer grupo de propuestas de modificación, debe considerarse que la redacción actual del artículo 3 de la Ley 29719, *in fine*, es la siguiente:

> "Artículo 3. Designación de un profesional de Psicología
> (...)
> El Ministerio de Educación define las funciones de este profesional, en el marco de la orientación, formación y terapia educacional individual o colectiva."

Siguiendo la misma metodología, presentamos a continuación un cuadro comparativo que muestra las propuestas acumuladas en el presente dictamen respecto de este extremo del artículo 3 de la Ley 29719:

Cuadro 5
Cuadro comparativo entre el artículo 3 de la Ley 29719 y las propuestas legislativas

PROYECTO DE LEY 1556/2021-CR	PROYECTO DE LEY 1906/2021-CR
"Artículo 3. Designación de un profesional en Psicología (...) El Ministerio de Educación define las funciones de este profesional, en el marco de la orientación, formación y terapia educacional individual o colectiva	"Artículo 3. Designación de un profesional en Psicología (...) El Ministerio de Educación define las funciones de este profesional, en el marco de la orientación, formación y terapia educacional individual o colectiva
El director de la institución educativa pública que incumpla con el presente artículo es pasible de procedimiento administrativo sancionador acorde a la ley sobre la materia.	
Las instituciones educativas privadas que incumplan con el presente artículo serán sancionadas con diez unidades impositivas tributarias por cada mes que mantenga.	
Se habilita a las instituciones educativas públicas o privadas coordinar con las asociaciones de padres de familia, reguladas en la Ley 28628, a darle cumplimiento al presente artículo."	**Las instituciones educativas públicas y privadas deben coordinar con las asociaciones de padres de familia, reguladas en la Ley 28628, Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones públicas, y en el literal d) del artículo 72 de la Ley 28004, Ley general de Educación, respectivamente, a fin de dar cumplimiento al presente artículo."**

En cuanto a la propuesta relativa al establecimiento de sanciones administrativas a los directores de las instituciones educativas públicas y a las instituciones educativas en general que incumplan lo señalado en el artículo 3 de la Ley 29719, debemos señalar que el Decreto Supremo N° 005-2021-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica, ya contiene las infracciones y las sanciones relacionadas a la convivencia democrática escolar en el marco de los lineamientos generales establecido en la Ley 29719, Ley de convivencia sin violencia en las instituciones educativas.

Así, tenemos que el Anexo 01 (página 87) del referido decreto supremo presenta la siguiente tabla de infracciones administrativas:

Tabla 1
Tabla de infracciones administrativas según el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica

NÚMERO	INFRACCIÓN	SANCIÓN
1	Incumplir con afiliar a la IE privada a las distintas plataformas virtuales destinadas a colaborar en la prevención y atención de la violencia escolar.	Leve
2	Incumplir con registrar las acciones tomadas para la atención de los casos de violencia sexual y/o física con lesiones y/o armas entre estudiantes y de violencia psicológica, física o sexual del personal de la IE privada a un estudiante, en el Libro de Registro de Incidencias y en los sistemas informáticos que el MINEDU establezca para este fin, en los plazos contemplados en las normas de la materia.	Grave
3	No contar con un procedimiento para la atención de denuncias o quejas por casos de prevención y atención de violencia escolar de acuerdo con la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, y su Reglamento y demás disposiciones normativas emitidas por el MINED.	Grave
4	No comunicar a las autoridades competentes los presuntos hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, en el plazo máximo de veinticuatro horas de detectado o conocido el caso, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2018-MINED.	Grave

En consecuencia, tal como se ha expuesto *supra*, este extremo de la propuesta legislativa ya se encuentra regulado y por lo tanto no es atendible.

En cuanto al Proyecto de Ley 4007/2022-CR, el cual propone la implementación de las cámaras de videovigilancia en los centros educativos, esta comisión considera que tal iniciativa constituye un mecanismo muy importante dentro del enfoque de la prevención de los actos de acosos escolar. En efecto, debemos recordar que el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1218, Decreto Legislativo que regula el uso de las cámaras de videovigilancia, señala lo siguiente:

> "Artículo 1.- Objeto
> El presente decreto legislativo tiene como objeto regular el uso de cámaras de videovigilancia en bienes de dominio público, vehículos de servicio de transporte público de pasajeros y establecimientos comerciales abiertos al público con un aforo de cincuenta (50) personas o más, como instrumento de vigilancia ciudadana, para la prevención de la violencia y del delito, así como el control

> y persecución del delito o falta en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana."

Como se advierte esta norma regula el uso de las cámaras de videovigilancia, entre otros lugares, en los bienes de dominio público. Este concepto es a su vez desarrollado por el artículo 2 de la mencionada ley, el cual indica que es:

> "Artículo 2.- Definiciones
> Para efectos de la presente norma se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
> (...)
> b. Bienes de dominio público.- Aquellos bienes estatales destinados al uso público, cuya administración, conservación y mantenimiento corresponde a una entidad; aquellos que sirven de soporte para la prestación de cualquier servicio público o cuya concesión compete al Estado. Tienen el carácter de inalienables e imprescriptibles. Sobre ellos, el Estado ejerce su potestad administrativa, reglamentaria y de tutela conforme a ley."

En ese sentido, si bien la norma citada señala de manera general que los bienes de dominio público deben contar con sus correspondientes cámaras de videovigilancia, el artículo 7 es más explícito al señalar que los colegios también deben contar con dichas cámaras.

> "Artículo 7.- Uso de cámaras de videovigilancia en bienes de dominio público
> Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que administren bienes de dominio público deben instalar cámaras de videovigilancia, bajo los estándares técnicos establecidos en el reglamento del presente Decreto Legislativo, para contribuir a la seguridad ciudadana y articularse con la Policía Nacional del Perú y las Gerencias de Seguridad Ciudadana de las municipalidades o la que hagan sus veces. La instalación de cámaras de videovigilancia debe responder al planeamiento territorial y de desarrollo urbano y rural, así como a los planes distritales de seguridad ciudadana.

> Las cámaras de videovigilancia son utilizadas en playas, plazas, parques, infraestructura vial, vías férreas, caminos, sedes gubernativas e institucionales, escuelas, hospitales, estadios, bienes afectados en uso a la defensa nacional, establecimientos penitenciarios, espacios culturales, cementerios, puertos, aeropuertos y otros destinados al cumplimiento de los fines de responsabilidad estatal, o cuya concesión compete al Estado." (Subrayado nuestro)

Esta norma es desarrollada de manera diáfana y amplia, precisando que las instituciones educativas deben contar con las cámaras de vigilancia correspondientes. Así, el artículo 8 del Decreto Supremo N° 007-2020-IN, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1218, Decreto Legislativo que regula el uso de las cámaras de videovigilancia y de la Ley Nº 30120, Ley de Apoyo a la Seguridad Ciudadana con Cámaras de Videovigilancia Públicas y Privadas, y dicta otras disposiciones, señala lo siguiente:

> "Artículo 8. Cámaras de videovigilancia en bienes de dominio público
> 8.1. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que administren bienes de dominio público deben instalar cámaras de videovigilancia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del presente Reglamento.
> 8.2. La instalación de cámaras de videovigilancia en bienes de dominio público debe responder al planeamiento territorial y de desarrollo urbano y rural, así como a los planes distritales de seguridad ciudadana, conforme a lo señalado en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1218. Asimismo, el proyecto de implementación de cámaras de videovigilancia que abarca tal instalación puede ser considerado dentro del Plan de Gobierno Digital (PGD).
> 8.3. Las cámaras de videovigilancia son instaladas en:
> a. Sitios o recintos destinados al uso público, como infraestructura vial y de transporte (carreteras, avenidas, calles, jirones, caminos, pasajes, entre otros), playas, parques, plazas, accesos peatonales, paraderos autorizados y accesos vehiculares, centros culturales o de esparcimiento, monumentos históricos, edificaciones de

> patrimonio cultural, recintos deportivos, su área de influencia deportiva, entre otros.
> b. Bienes que sirven de soporte para la prestación de un servicio público, como sedes gubernativas e institucionales, instituciones educativas, hospitales, estadios, bienes afectados en uso a la defensa nacional, establecimientos penitenciarios, cementerios, entre otros.
> c. Concesiones otorgadas por el Estado, como las concesiones mineras, petroleras, de agua potable y alcantarillado, eléctricas, telefonía fija o móvil, puertos marítimos o fluviales, aeropuertos, terrapuertos, entre otras." (Subrayado nuestro)

Como se ha expuesto, ya la normativa vigente no sólo habilita sino que obliga a los colegios a contar con las cámaras de videovigilancia dentro y fuera de sus instalaciones a fin de prevenir —y este es el problema de la ineficacia de la norma respecto de la prevención del bullying— los delitos y las faltas, no respecto de los casos de acoso escolar.

Por esta razón la Comisión de Educación, Juventud y Deporte propone una fórmula sustitutoria que, sobre la base de compatibilización de la regulación existente y de la propuesta contenida en el proyecto de ley bajo análisis, precise que la finalidad de la instalación de las cámaras de videovigilancia en los colegios, además de la prevención de la comisión de delitos y faltas, es la prevención del *bullying*.

Esta propuesta es concordante con lo señalado por los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, aprobados mediante el Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, con lo dispuesto en la Orientación Estratégica 07 del Proyecto Educativo Nacional al 2036, así como lo prescrito en la Sétima Política de Estado del Acuerdo Nacional.

Por otro lado, respecto de la propuesta de habilitación de las instituciones educativas públicas y privadas a participar activamente con las asociaciones de padres de familia a fin de tratar la problemática relativa al acoso escolar, esta comisión toma en consideración el hecho de que la propia Ley 28628, Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las

instituciones educativas públicas, el literal e) del numeral 1 de su artículo 6 sostiene:

> "Artículo 6. Atribuciones"
> La Asociación de Padres de Familia ejerce las siguientes atribuciones:
> 1. Directamente:
> e) Gestionar la implementación de programas de apoyo alimentario; de salud física y mental; de deportes, orientación vocacional y de otros servicios que contribuyan al bienestar de los estudiantes."

Teniendo en cuenta la cita anterior, esta comisión concluye que en la medida en que actualmente las denominadas APAFA ya se encuentran facultadas a realizar acciones con la finalidad de cautelar la salud física y mental de la comunidad educativa, incluyendo —claro está— la de los niños y adolescentes, cuya atención es, como señalamos *supra*, prioritaria.

Complementariamente, debe tenerse en consideración que el Consejo Educativo Institucional (CONEI), de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 28044, Ley General de Educación, es un órgano de participación, concertación y vigilancia ciudadana y se encuentra integrado, entre otros, por los padres de familia. Si bien sus funciones se encuentran reguladas en el artículo 136 del Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el reglamento de la Ley 28044, Ley General de Educación, el artículo 4 de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, señala que:

> "Artículo 4. Consejo Educativo Institucional (CONEI)
> El Consejo Educativo Institucional (CONEI) de cada institución educativa realiza, además de sus atribuciones, las acciones necesarias para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre escolares en cualquiera de sus manifestaciones, acuerda las sanciones que correspondan y elabora un plan de sana convivencia y disciplina escolar, siguiendo las indicaciones emanadas del Ministerio de Educación, que recogen y concretan los valores, objetivos y prioridades de actuación que orientan y guían el mutuo

respeto y la solución pacífica de los conflictos." (Subrayado nuestro).

Como se desprende del párrafo citado, la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, no distingue entre instituciones públicas o privadas, por lo que es de aplicación —su propio objeto así lo señala— a todas las instituciones educativas del país. La participación de los padres, a través del Consejo Educativo Institucional, se encuentra precisada en el Decreto Supremo N° 010-2012-ED, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas.

Por lo tanto, al encontrarse ya regulada la participación de las asociaciones de padres de familia como de estos, sea en las instituciones educativas públicas o sea en las privadas, en la labor de prevención y tratamiento del acoso escolar, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte considera que este extremo de la propuesta legislativa no es atendible.

3.3. Sobre la propuesta de la colocación de señaléticas en los lugares visibles de las instituciones educativas (proyectos de ley 1906/2021-CR y 3457/2022-CR)

Sobre el particular, analizamos dos propuestas legislativas. La primera (Proyecto de Ley 1906/2021-CR busca añadir en el artículo 13 de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, según la cual toda institución educativa, sin perjuicio de su obligación de entregar al inicio del año escolar a los estudiantes y a los padres de familia un boletín informativo sobre la proscripción de todo tipo de violencia escolar, le corresponde promover la colocación de señaléticas en lugares visibles con mensajes contra el acoso escolar.

En segundo lugar, tenemos la propuesta del Proyecto de Ley 3457/2022-CR, según el cual se pretende incorporar en la referida ley el artículo 14 a fin de que se disponga que los directores deberán publicar carteles en las instalaciones de sus respectivas instituciones educativas para generar conciencia sobre el acoso y violencia entre los alumnos.

Al respecto, debe considerarse que, mediante el Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU se aprobaron los Lineamientos para la Gestión de Convivencia Escolar,

la Prevención y la Atención de la Violencia contra la niñas, niños y adolescentes. En este documento de trazan las líneas de acción generales que deben emprender todas las instituciones educativas, que permite a los directores realizar la labor de visibilización permanente de las prohibiciones sobre el acoso escolar. Específicamente, debe considerarse los subnumerales 8.2.2., que regula las Normas de Convivencia de la Institución Educativa, y el 8.2.3., que regula las Normas de Convivencia del Aula, donde se advierte la inclusión de acciones relativas a la elaboración, actualización, validación, publicación y difusión de las normas de convivencia.

En consecuencia, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte considera que las mencionadas iniciativas normativas tampoco son de recibo.

3.4. Sobre las propuestas de modificación del artículo 3 de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas

Este proyecto de ley este propone en su artículo 4 la restitución en el Ministerio de Educación de la antigua Dirección Nacional de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar (DITOECE), la misma que contaría con dos subdirecciones: i) la Subdirección Nacional de Tutoría y Orientación Educativa y prevención de riesgo, y, ii) la Subdirección Nacional para la convivencia y disciplina escolar.

Sin embargo, debe considerarse que la tutoría y orientación educativa se encuentra incluida en el documento normativo denominado "Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa para la Educación Básica", aprobado mediante la Resolución Viceministerial N° 212-2020-MINEDU que promueve y fortalece el desarrollo integral y el bienestar de los estudiantes, lo cual le da un soporte de política pública, institucional y normativo.

En efecto, tal como lo señala el Ministerio de Educación en su opinión institucional contenida en el Informe N° 00944-2022-MINEDU/SG-OGAJ, el citado documento normativo fue realizado sobre la base de lo señalado en el Acuerdo Nacional, en el Proyecto Educativo Nacional - PEN al 2036: El Reto de la Ciudadanía Plena, en el Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2016-2021, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 28044, Ley General de Educación y en su reglamento, así como con el Currículo Nacional de Educación Básica, aprobado por Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU.

En ese sentido, las políticas sectoriales son determinadas por el titular del sector. Así, tenemos que el artículo 3 de la Ley 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, señala lo siguiente:

> "Artículo 3. Sector educación
> El sector educación se encuentra bajo la conducción y rectoría del Ministerio de Educación. Está conformado por este, sus entidades y organismos dependientes o adscritos. En ejercicio de su potestad rectora, comprende, además, a las instituciones privadas, así como aquellas de los niveles de gobierno nacional, regional y local que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en la presente ley y que tienen impacto directo o indirecto en la educación."

Complementariamente, el artículo 5 de la misma ley prescribe las funciones generales del Ministerio de Educación:

> "Artículo 5. Funciones generales
> El Ministerio de Educación, dentro del ámbito de su competencia, tiene las siguientes funciones generales:
> 1. Funciones rectoras
> a) Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno.
> (...)
> 2. Funciones técnico-normativas
> a) Aprobar las disposiciones normativas vinculadas con sus ámbitos de competencia.
> (...)"

Por lo tanto, las competencias para establecer la política sectorial en el sector educación le corresponde al Ministerio de Educación y no al Congreso de la República. Sin perjuicio de ello, cabe resaltar lo señalado por el Consejo Nacional de Educación, el cual en el Oficio N° 61-2022-CNE, emite su opinión institucional manifestando que el contenido de la iniciativa legislativa bajo análisis pretende regular aspectos técnico-normativos cuanto en realidad estos aspectos, por lo menos en el sector Educación, deben ser regulados por normas

de menor jerarquía como, por ejemplo, las resoluciones ministeriales, viceministeriales, directorales o jefaturales, entre otras.

En cuanto a la propuesta de restituir la Dirección Nacional de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar (DITOECE), debe considerarse que actualmente el Ministerio de Educación ya contempla en sus funciones el desarrollo de Tutoría y Orientación Educativa.

En efecto, mediante el Decreto Supremo N° 006-2006-ED, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del MINEDU, se creó, entre otras direcciones, la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa, que asumió las funciones de la Oficina de Tutoría y Prevención Integral.

Sin embargo, en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, no aparece la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa. Este reglamento señala además que la Dirección General de Educación Básica regular es la responsable de proponer las políticas y los documentos normativos, así como de dirigir de manera articulada la implementación de las acciones para la mejora y logro de los aprendizajes y el acceso, la permanencia y la culminación oportuna de la educación básica regular.

Finalmente, mediante la Resolución Ministerial N° 073-2015-MINEDU se aprobó el Cuadro de Equivalencias de órganos y unidades orgánicas, en cuyo ítem 9 se prescribía que la Dirección General de Educación Básica Regular, asumía las funciones asignadas en el Reglamento de Organización y Funciones del MINEDU con respecto a Tutoría y Orientación Educativa.

Por su parte, en el artículo 9 el proyecto de ley las direcciones de educación regional y las unidades de gestión educativa (o quien haga de sus veces) deberán contar cada una con un coordinador en tutoría y orientación educativa y convivencia escolar, cuya labor será a tiempo completo y a dedicación exclusiva. Su designación deberá ser hecha mediante concurso público. Sin embargo, el cargo de Coordinador en Tutoría y Orientación Educativa ya se encuentra reconocido como parte de la Carrera Pública Magisterial en el artículo 12 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, es decir, su ingreso se encuentra ya regulado mediante el concurso de acceso y encargatura.

De otro lado, la propuesta legislativa precisa que el régimen laboral de los especialistas (profesionales multidisciplinarios) será el establecido en la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, o, en su defecto, cualquier otra que le la derogue o reemplace. Al respecto, la creación del cargo de Especialistas Promotores de Tutoría y Orientación Educativa como parte de la Carrera Pública Magisterial, se contradice con lo dispuesto en el numeral 18.1 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial.

Finalmente, y como comentario general respecto del resto del articulado del proyecto de ley bajo análisis, debemos señalar, siguiendo lo señalado por la opinión institucional del Ministerio de Educación contenida en el Informe N° 00937-2002MUNEDU/SG-GAJ, que la Dirección de Gestión Escolar aprobó, mediante la Resolución Viceministerial N° 005-2021-MINEDU, el documento normativo denominado "Estrategia para el fortalecimiento de la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia en las instancias de gestión educativa descentralizada", así como de lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU que aprueba los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

El objetivo de dicha estrategia es que las comunidades educativas ejerzan sus derechos con responsabilidad, promuevan una convivencia basada en el bien común y se relacionen democráticamente, sin violencia ni discriminación, en escuelas seguras, inclusivas, con igualdad de género, valoración de la diversidad y basadas en un diálogo intercultural. Con esta, se espera lograr los siguientes resultados: (i) que los integrantes de la comunidad educativa fortalezcan sus habilidades socioemocionales, desarrollen un sentido de pertenencia y bienestar, y participen democráticamente con un reconocimiento positivo de la diversidad e igualdad de género y que (ii) las escuelas seguras y protectoras gestionen los conflictos de manera pacífica, promuevan una convivencia democrática con acuerdos o normas de convivencia concertadas y con una disciplina basada en un enfoque de derechos.

3.5. Sobre las propuestas contenidas en el Proyecto de Ley 3756/2022-CR

Como hemos mencionado supra, la propuesta de ley propone incorporar al acoso virtual y al *ciberbullying* como supuestos de violencia entre los alumnos de las instituciones educativas. Asimismo, propone que será parte de las obligaciones de los docentes realizar el respectivo monitoreo de los alumnos involucrados en

los hechos de violencia y de acoso. En la misma línea, se propone que el director disponga la ejecución de las acciones orientadas a fomentar la convivencia sin violencia en las entidades educativas.

Además, se propone que cada institución educativa deberá llevar un libro de registro de incidencias sobre violencia y acoso entre los estudiantes, el cual estará a cargo del director y tendrá anotado todos los hechos de violencia, de intimidación, de hostigamiento, de discriminación, de difamación y de cualquier otra manifestación que constituya acoso, acoso virtual o *ciberbullying.*

Finalmente, propone, por un lado, que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) esté facultado para imponer multas desde 01 hasta 10 UIT a quienes incumplan lo desarrollado en el reglamento de la Ley 29719, y, por otro, que el incumplimiento de lo establecido en la ley y su reglamento sea sancionado en la vía administrativa, civil y/o penal, según corresponda.

Al respecto, esta comisión toma en consideración que la opinión institucional emitida por el Ministerio de Educación a través del Oficio N° 155-2023-MINEDU/SG, de fecha 13 de enero de 2023, en el sentido de que el artículo 6 de la Ley 29719 ya incluye en su redacción, de manera expresa, al bullying realizado a través de los medios telefónicos, electrónicos o informáticos. Así, el referido artículo 6 de la Ley 29719 señala lo siguiente:

> "Artículo 6. Obligaciones de los docentes
> Los docentes y los miembros del personal auxiliar de la institución educativa tienen la obligación de detectar, atender y denunciar de inmediato ante el Consejo Educativo Institucional (Conei) los hechos de violencia, intimidación, hostigamiento, discriminación, difamación y cualquier otra manifestación que constituya acoso entre los estudiantes, incluyendo aquellos que se cometan por medios telefónicos, electrónicos o informáticos y sobre los que hayan sido testigos o hayan sido informados. Para tales casos, dicho consejo se reúne dentro de los dos días siguientes para investigar la denuncia recibida y la resuelve en un plazo máximo de siete días.
> Cuando se trate de casos de poca gravedad, los docentes deben sancionar directamente a los estudiantes agresores,

> sin perjuicio de su obligación de informar sobre dicho incidente al Consejo Educativo Institucional (Conei), para los efectos de su inscripción en el Libro de Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes." (Subrayado nuestro)

En ese sentido, y tal como se desprende de la cita anterior, el extremo propuesto por la iniciativa legislativa bajo análisis no es de recibo por ya encontrarse regulado.

De otro lado, en cuanto a la propuesta de modificación del artículo 6 de la Ley 29719 en el sentido de que se instaure un monitoreo respecto de los casos de *bullying* en la institución educativa, esta comisión considera que el Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU ya incorpora las medidas de seguimiento a los estudiantes involucrados en el acto. En efecto, tal norma señala lo siguiente:

> "**8.3.2. Atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes**
> (...)
> El director o directora de la institución educativa, a través del Comité de Tutoría y Orientación Educativa, coadyuva en la atención oportuna de los casos de violencia contra las y los estudiantes en el marco de los Protocolos para la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes (véase Anexo 03).
>
> El proceso de atención y seguimiento de casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes en la institución educativa se realiza a través de los siguientes pasos:
>
> a. Acción: son las medidas adoptadas por la institución educativa para atender los casos de violencia detectados y proteger todos los niños, niñas y adolescentes involucrados.
> b. Derivación: es la comunicación con un servicio externo especializado de atención de la violencia o el traslado de la víctima y/o el agresor (de ser una niña, niño y adolescente), si se estima necesario.

> c. Seguimiento: es el acompañamiento y la supervisión del bienestar de todos los o las estudiantes (atención psicológica, acompañamiento pedagógico, soporte emocional, etc.) así como la restauración de la convivencia afectada y la verificación del cese de todo tipo de agresión.
> d. Cierre: es la finalización de la atención del caso cuando se hayan cumplido todos los pasos previos. Debe garantizarse la continuidad educativa de la o del estudiante, así como su protección y acogida."

Tal como se advierte de la cita anterior, la propuesta de monitoreo de los casos de *bullying* en las instituciones educativas ya se encuentra regulada en la normativa citada. Lo mismo puede predicarse de la propuesta de modificación del artículo 12, relativo al monitoreo de los casos de acosos escolar. De otro lado, en cuanto a la propuesta de modificación del artículo 11 relativo a la obligatoriedad de llevar un Libro de Registro, debe tenerse en consideración que el mismo decreto supremo ya lo regula de la siguiente manera:

> "**8.3.3. Libro de registro de incidencias**
> Todo caso de violencia escolar del que se tenga conocimiento es anotado en el Libro de Registro de Incidencias y reportado en el portal SíseVe. El reporte da inicio al proceso de atención y seguimiento, el cual sigue las pautas indicadas en los Protocolos para la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes (véase Anexo 03). No se registran en el SíseVe los casos de violencia cometida por un miembro de la familia u otra persona que no pertenezca a una institución educativa.
>
> El director o directora de la institución educativa asume la responsabilidad de comunicar a la UGEL respectiva y a cualquier otra autoridad competente (Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y otras instituciones especializadas que tienen a su cargo servicios de atención a casos de violencia) las situaciones de violencia realizadas por el personal de la institución educativa hacia los estudiantes (véase Anexo 04)."

En cuanto a la propuesta que tiene como objetivo modificar el artículo 10 de la Ley 29719 tenemos dos extremos. El primero es el relativo a la precisión de las formas de acoso escolar. Al respecto, debemos remitirnos a lo señalado en el artículo 6 de la Ley 29719 y a la argumentación que sobre ella realizamos supra, así como al artículo 2 de la referida ley, que señala que tal norma regula la "prohibición del acoso escolar, en cualquiera de sus modalidades, cometidos por los alumnos entre sí (...)". Ene se sentido, este extremo de la propuesta ya se encontraría regulado.

El segundo extremo es el relativo a la modificación del mismo artículo 10 de la Ley 29719 en el sentido de incorporar, respecto del Instituto de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, la obligación de imponer multas desde 1 UIT hasta 10 UIT. Sobre el particular la Comisión de Educación, Juventud y Deporte sostiene que el Código del Consumidor ya regula en su artículo 110 los rangos de los montos de las sanciones en función a la naturaleza de la infracción, tal como se muestra a continuación:

> "Artículo 110.- Sanciones administrativas.
> El órgano resolutivo puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108 con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:
> a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT.
> b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.
> c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT.
> (...)"

Asimismo, el artículo 12 de la misma norma regula los criterios que deben aplicarse para la determinación de las sanciones, conforme se aprecia en la siguiente cita:

> "Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas.
> Al graduar la sanción, el órgano resolutivo puede tener en consideración los siguientes criterios:

> 1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.
> 2. La probabilidad de detección de la infracción.
> 3. El daño resultante de la infracción.
> 4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.
> 5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores.
> 6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar.
> (...)"

En consecuencia, la propuesta bajo comentario no es de recibo en la medida en que: i) supone una injerencia en la autonomía del INDECOPI, quien tiene una amplia discrecionalidad para la determinación de las sanciones, donde la sanción máxime puede llegar incluso a las 450 UIT; ii) desnaturalizaría los criterios de determinación de la cuantía de las sanciones (no estamos ante un sistema tasado); y, iii) permitiría que eventualmente el órgano sancionador se encuentre prohibido de imponer una sanción mayor a las 10 UIT.

De otro lado, en cuanto a la propuesta de modificación del artículo 7 de la Ley 29719 en el sentido de que el director sea el que disponga la ejecución de las acciones orientadas a fomentar la convivencia en la institución educativa, esta comisión considera que el artículo 69 de la Ley General de Educación señala que el Consejo Educativo Institucional se encuentra presidido por el director del colegio e integrado por otros miembros, entre ellos, los padres de familia.

Si bien sus funciones se encuentran reguladas en el artículo 136 del Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el reglamento de la Ley 28044, Ley General de Educación, el artículo 4 de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, señala que:

> "Artículo 4. Consejo Educativo Institucional (CONEI)
> El Consejo Educativo Institucional (CONEI) de cada institución educativa realiza, además de sus atribuciones, las acciones necesarias para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre escolares en cualquiera de sus

manifestaciones, acuerda las sanciones que correspondan y elabora un plan de sana convivencia y disciplina escolar, siguiendo las indicaciones emanadas del Ministerio de Educación, que recogen y concretan los valores, objetivos y prioridades de actuación que orientan y guían el mutuo respeto y la solución pacífica de los conflictos."

En el mismo sentido, el artículo 10 del Decreto Supremo N° 010-2012-ED, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas, señala que entre las funciones del responsable de la convivencia democrática en los colegios se encuentran las siguientes:

"Artículo 10.- Funciones del equipo responsable de la Convivencia Democrática
El equipo responsable cumple con las siguientes funciones:
a) Planificar, implementar, ejecutar y evaluar el Plan de Convivencia Democrática con la participación de las organizaciones estudiantiles, el mismo que debe incluir acciones formativas, preventivas y de atención integral.
b) Incentivar la participación de los integrantes de la comunidad educativa en la promoción de la Convivencia Democrática.
c) Promover la incorporación de la Convivencia Democrática en los instrumentos de gestión de la institución educativa.
d) Liderar el proceso de construcción de normas de convivencia consensuadas entre los integrantes de la comunidad educativa.
e) Desarrollar acciones que favorezcan la calidad de las relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa, especialmente la relación docente-estudiante y estudiante-estudiante.
f) Promover el desarrollo de capacidades y actitudes de las y los docentes, así como del personal directivo, administrativo y de servicio, que permitan la implementación de acciones para la Convivencia Democrática en la institución educativa.

g) Registrar los casos de violencia y acoso entre estudiantes en el Libro de Registro de Incidencias de la institución educativa, así como consolidar información existente en los anecdotarios de clase de los docentes, a fin de que se tomen las medidas pertinentes y permitan la elaboración de las estadísticas correspondientes.
h) Adoptar medidas de protección, contención y corrección, frente a los casos de violencia y acoso entre estudiantes, en coordinación con el Director o la Directora.
i) Informar periódicamente por escrito, al Director o la Directora de la institución educativa acerca de los casos de violencia y acoso entre estudiantes, anotados en el Libro de Registro de Incidencias, y de las medidas adoptadas.
j) Informar al Director o la Directora sobre las y los estudiantes que requieran derivación para una atención especializada en entidades públicas o privadas.
k) Realizar, en coordinación con el Director o la Directora y los padres de familia o apoderados, el seguimiento respectivo de las y los estudiantes derivados a instituciones especializadas, garantizando su atención integral y permanencia en la institución educativa."

Por lo tanto, este extremo de la propuesta legislativa ya se encuentra regulado, puesto que el director, en tanto responsable de la convivencia escolar, ya se ocupa de la ejecución de las acciones orientadas a fomentar la convivencia sin violencia en las escuelas y muchas más.

IV. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

El presente dictamen promueve la identificación de los agresores y de las víctimas de acoso escolar, permitiendo de esta manera la individualización del tratamiento ulterior. Asimismo, genera un efecto disuasivo respecto de los otros estudiantes al saber que las instalaciones internas y externas se encuentran vigiladas.

De otro lado, promueve el acercamiento de este tipo de profesionales a la realidad educativa nacional, permitiéndoles adquirir experiencia en el tratamiento de casos de acoso escolar. Asimismo, amplia el campo de acción profesional a

fin de que puedan ocupar cargos en entidades públicas, ingresar a los programas de segunda especialización profesional y recibir del Estado beca u otra ayuda equivalente para estudios o perfeccionamiento.

Finalmente, promueve la cultura de paz en la sociedad peruana al identificar oportunamente los problemas de conducta de los adolescentes, quienes ya no serán adultos violentos, y cumplir con los lineamientos de salud pública que el Estado peruano ha establecido.

A continuación, presentamos un cuadro que sintetiza los beneficios de la presente propuesta legislativa:

CUADRO 6
Efectos cualitativos de los involucrados de aprobarse la iniciativa legislativa

Involucrados	Efectos directos	Efectos indirectos
Estudiantes	○ Se promueve la identificación de los agresores y de las víctimas de acoso escolar, permitiendo de esta manera la individualización del tratamiento ulterior.	○ Se genera un efecto disuasivo respecto de los otros estudiantes al saber que las instalaciones internas y externas se encuentran vigiladas.
Psicólogos	○ Se promueve el acercamiento de este tipo de profesionales a la realidad educativa nacional, permitiéndoles adquirir experiencia en el tratamiento de casos de acoso escolar.	○ Les amplia el campo de acción profesional a fin de que puedan ocupar cargos en entidades públicas, ingresar a los programas de segunda especialización profesional y recibir del Estado beca u otra ayuda equivalente para estudios o perfeccionamiento
Estado	○ Se promueve la cultura de paz en la sociedad peruana al identificar oportunamente los problemas de conducta de los adolescentes, quienes ya no serán adultos violentos.	○ Se cumple con los lineamientos de salud pública que el Estado peruano ha establecido.

Elaboración: Comisión de Educación. Juventud y Deporte.

Como podemos apreciar del cuadro anterior, la aprobación de este dictamen, lejos de producir costos para el Estado, genera importantes beneficios a la sociedad.

V. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, de conformidad con el literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la **APROBACIÓN** de los proyectos de ley 1399/2021-CR, 1556/2021-CR, 1569/2021-CR, 1906/2021-CR, 3457/2022-CR, 3723/2022-CR, 3756/2022-CR y 4007/2022-CR, con el siguiente texto sustitutorio:

TEXTO SUSTITUTORIO

El Congreso de la República;

Ha dado la siguiente Ley:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 29719, LEY QUE PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, A FIN DE FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 1. Modificación del artículo 3 de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas
Se modifica el artículo 3 de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, con la siguiente redacción:

> "Artículo 3. Designación de un profesional de Psicología.
> Declárese de necesidad la designación de, por lo menos, un profesional de Psicología en cada institución educativa, encargado de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre los alumnos.
> La implementación de esta disposición se realiza en forma progresiva de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.
> El Ministerio de Educación define las funciones de este profesional, en el marco de la orientación, formación y terapia educacional individual o colectiva.
> **Los profesionales psicólogos pueden realizar el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud – SERUMS en las instituciones educativas públicas, conforme a**

los lineamientos que establezca el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Educación, previa disponibilidad presupuestal".

Artículo 2. Incorporación del artículo 14 a la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas
Se incorpora el artículo 14 a la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, con la siguiente redacción:

> **"Artículo 14. Medidas de prevención de la violencia y acoso escolar**
> **El director de la institución educativa recurre a herramientas tecnológicas para reforzar la seguridad en el entorno escolar a fin de prevenir y combatir el acoso escolar. Para tal efecto, el director está facultado a realizar gestiones para instalar cámaras de videovigilancia en las zonas comunes y el entorno de la institución educativa, resguardando la intimidad de las personas, pudiendo celebrar convenios con entidades del sector público y privado".**

Artículo 3. Modificación del artículo 1 del Decreto Legislativo 1218, Decreto Legislativo que regula el uso de las cámaras de videovigilancia
Se modifica el artículo 1 del Decreto Legislativo 1218, Decreto Legislativo que regula el uso de las cámaras de videovigilancia, con la siguiente redacción:

> "Artículo 1.- Objeto
> El presente decreto legislativo tiene como objeto regular el uso de cámaras de videovigilancia en bienes de dominio público, vehículos de servicio de transporte público de pasajeros y establecimientos comerciales abiertos al público con un aforo de cincuenta (50) personas o más, como instrumento de vigilancia ciudadana, para la prevención de la violencia, **del acoso escolar** y del delito, así como el control y persecución del delito o falta en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana."

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: JOSE LUIS ELIAS AVALOS
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/02/2023 10:08:40-0500

Firmado digitalmente por: MARTICORENA MENDOZA JORGE ALFONSO FIR 21456255 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/02/2023 09:47:27-0500

CONGRESO de la REPÚBLICA

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, de la paz y el desarrollo."

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 1399/2021-CR, 1556/2021-CR, 1569/2021-CR, 1906/2021-CR, 3457/2022-CR, 3723/2022-CR, 3756/2022-CR Y 4007/2022-CR, EN VIRTUD DEL CUAL SE PROPONE LA LEY QUE MODIFICA LA LEY 29719, LEY QUE PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, A FIN DE FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.

Firmado digitalmente por: RAMIREZ GARCIA Tania Estefany FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/02/2023 10:17:29-0500

Firmado digitalmente por: PAREDES FONSECA Karol Nett FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/02/2023 11:29:14-0500

Dese cuenta.
Sala de Comisiones.
Lima, 7 de febrero de 2023.

Firmado digitalmente por: ECHAIZ DE NUÑEZ IZAGA Gladys Margot FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/02/2023 10:28:06-0500

Firmado digitalmente por: CRUZ MAMANI Flavio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/02/2023 11:29:15-0500

Firmado digitalmente por: PAREDES GONZALES Alex Antonio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/02/2023 11:36:02-0500

Firmado digitalmente por: PABLO MEDINA Flor Aidee FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/02/2023 12:12:03-0500

Firmado digitalmente por: CHIABRA LEON Roberto Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/02/2023 11:44:38-0500

Firmado digitalmente por: INFANTES CASTAÑEDA Mery Eliana FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/02/2023 16:34:35-0500

Firmado digitalmente por: HUAMAN CORONADO Raul FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/02/2023 16:57:06-0500

Firmado digitalmente por: CORDERO JON TAY Maria Del Pilar FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/02/2023 19:49:45-0500

Firmado digitalmente por: REVILLA VILLANUEVA CESAR MANUEL FIR 44275599 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/02/2023 10:12:09-0500

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 1399/2021-CR, 1556/2021-CR, 1569/2021-CR, 1906/2021-CR, 3457/2022-CR, 3723/2022-CR, 3756/2022-CR Y 4007/2022-CR, EN VIRTUD DEL CUAL SE PROPONE LA LEY QUE MODIFICA LA LEY 29719, LEY QUE PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, A FIN DE FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MEDINA MINAYA Esdras Ricardo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/02/2023 12:12:14-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MORI CELIS Juan Carlos FAU 20161749126 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 14/02/2023 10:26:26-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: RIVAS CHACARA Janet Milagros FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/02/2023 17:20:15-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: HERRERA MEDINA Noelia Rossvith FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/02/2023 11:15:54-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: QUISPE MAMANI Wilson Rusbel FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/02/2023 12:48:54-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: GUTIERREZ TICONA Paul Silvio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/02/2023 12:35:40-0500

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
(SESIÓN SEMIPRESENCIAL)
MARTES 7 DE FEBRERO DE 2023

Presidida por la congresista Gladys Margot Echaíz de Núñez Izaga

A las 15 horas y 15 minutos en el Hemiciclo de Sesiones del Palacio Legislativo, se pasó lista[1] a la que contestaron, de manera presencial, los congresistas Flavio Cruz Mamani, Mery Eliana Infantes Castañeda, Paul Silvio Gutiérrez Ticona y Jorge Alfonso Marticorena Mendoza (miembros titulares); y, de manera virtual, a través de la Plataforma Microsoft Teams, los congresistas Wilson Rusbel Quispe Mamani, Juan Carlos Mori Celis, Raúl Huamán Coronado, Tania Estefany Ramírez García, Karol Ivett Paredes Fonseca, Roberto Chiabra León, Noelia Rossvith Herrera Medina, José Luis Elías Ávalos, Roberto Helbert Sánchez Palomino y Flor Aidee Pablo Medina (miembros titulares).

Con el *quorum* de Reglamento, la **PRESIDENTA** inició la sesión.

Se dejó constancia de la dispensa presentada por el congresista Eduardo Enrique Castillo Rivas (miembro titular).

—o0o—

I. SECCIÓN DESPACHO

La **PRESIDENTA** anunció que los documentos que han ingresado y que ha emitido la Comisión entre el 24 de diciembre de 2022 y el 3 de febrero de 2023 se encuentran a disposición de los señores congresistas, y que los que deseen copia de alguno de los documentos lo soliciten a la Secretaría Técnica de la Comisión.

II. SECCIÓN INFORMES

La **PRESIDENTA** informó que se recibió la Carta N°222-2022-GG-UAP, del gerente general de la Universidad Alas Peruanas, mediante la cual, ante la denegatoria de

[1] Durante el desarrollo de la sesión, se unieron, de manera virtual, los congresistas María del Pilar Cordero Jon Tay, Janet Milagros Rivas Chacara, Alex Antonio Paredes Gonzales y Esdras Ricardo Medina Minaya (miembros titulares) y César Manuel Revilla Villanueva (miembro accesitario).

la licencia institucional de la que fueron objeto, manifiesta que la SUNEDU no habría analizado la información remitida por la universidad y ni se habría respetado el debido proceso. Dijo que, por lo señalado, el señor gerente general solicita participar en la siguiente sesión de la comisión, con la finalidad de dar a conocer los detalles del referido proceso de licenciamiento.

Anotó que, de no haber objeción, en el transcurso de la sesión se definiría si se atiende el pedido formulado.

Seguidamente, invitó a los señores congresistas a formular sus informes.

El congresista **CRUZ MAMANI** expresó su preocupación sobre los efectos de las protestas sociales en el sistema educativo, toda vez que, a pocos días de dar inicio al año escolar, el cronograma del concurso de ingreso a la carrea pública magisterial ha sido modificado recientemente y no se tiene certeza de que esta vez sí se realice el proceso. Señaló que la implementación de la clase modelo y entrevista personal afectará el normal desarrollo de las clases escolares, debido a que los postulantes deberán desplazarse a lugares distintos a la localidad en la que fueron contratados.

Comentó que el Proyecto de Ley 1287/2021-CR, de su autoría, puede coadyuvar a mejorar las condiciones en las que se realiza el concurso de nombramiento docente.

Dijo que la modificación del cronograma del proceso de ascenso en la escala magisterial ha tenido un impacto negativo en la comunidad educativa. Por otro lado, mencionó que ninguna región está ejecutando acciones de mantenimiento de los locales escolares, a pesar de que en los meses de enero, febrero y parte de marzo, se debería haber tomado acción para el refaccionamiento de las instalaciones educativas.

Asimismo, dijo que el retraso en la distribución de materiales educativos perjudicaría el inicio del año escolar 2023. Y, por otro lado, manifestó que la disolución del Consejo Nacional de Educación, mediante Decreto Supremo 002-2023-MINEDU, del 27 de enero de 2023, es un acto que no puede pasar desapercibido, toda vez que se debe salvaguardar el carácter imparcial y democrático de la citada entidad.

La congresista **JÁUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO**[2] informó que sostuvo una reunión con el ministro de Educación respecto del cumplimiento de la Ley que obliga la participación de los padres de familia en la elaboración de textos escolares, el uso del lenguaje inclusivo en los textos escolares, la crisis de infraestructura

[2] La congresista María de los Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo no es miembro de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Participó en su calidad de congresista de la República, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 22 del Reglamento del Congreso de la República.

educativa en el país y la necesidad de contar con vacantes para estudiantes con discapacidad en los locales educativos.

Por su parte, el congresista **MARTICORENA MENDOZA** señaló que cuando se realizaron las elecciones en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, de las que resultó electo el rector Anselmo Magallanes, ocurrieron varios hechos irregulares que ocasionaron que la ONPE se retire del proceso electoral. Comentó que dichos actos fueron puestos en evidencia ante la SUNEDU; sin embargo, no se tomó acción al respecto.

Por otro lado, comentó que solicitará un reporte a la Contraloría para constatar si las observaciones que hizo dicha entidad sobre compras irregulares, sobrecostos y nepotismo durante la gestión del rector Magallanes, fueron acogidas por la universidad y subsanadas.

Asimismo, manifestó su indignación por la decisión que tomó el Consejo Universitario de declararlo persona no grata para la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y desmintió las declaraciones que afirman que habría exhortado al señor rector a renunciar a su cargo. Informó que, frente a ello, solicitará un informe legal.

El congresista **HUAMÁN CORONADO** dijo que las últimas decisiones tomadas por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica resultan preocupantes. Sugirió que la presidencia disponga cursar los oficios a las autoridades correspondientes para que el rector Anselmo Magallanes sea suspendido de sus funciones. Resaltó que la situación actual de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica está perjudicando a miles de estudiantes, sobre todo a aquellos que no tienen los medios económicos suficientes para optar por otras casas de estudios superiores.

El congresista **GUTIÉRREZ TICONA** informó que, mediante Oficio 832-2022-2023-PSGT-CR, de fecha 6 de febrero de 2023, solicitó citar al ministro de Educación, de ser posible para la próxima session, en razón del proceso de nombramiento y los reclamos que ha generado en el cuerpo docente. Por otro lado, dijo que, mediante Oficio 828/2022-2023-PSGT-CR, de fecha 3 de febrero de 2023, pidió la acumulación del Proyecto de Ley 4127/2022-CR en el predictamen recaído en los Proyectos de Ley 1421/2021-CR, 1945/2021-CR, 2136/2021-CR, 2511/2021-CR y 3140/2022-CR.

La congresista **JÁUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO** solicitó agendar la sustentación y elaboración de dictamen del Proyecto de Ley 3464/2022-CR, Ley que precisa el correcto uso del lenguaje incluso, evitando el desdoblamiento del lenguaje para referirse a hombres y mujeres en textos escolares.

La congresista **INFANTES CASTAÑEDA** informó que hay una gran preocupación por el cierre de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, toda vez que no logró obtener su licenciamiento institucional. Solicitó que se traslade al ministro de Educación el pedido de autoridades y docentes, que necesitan de los recursos para poder cumplir con las condiciones básicas de calidad que exige la SUNEDU.

El congresista **MORI CELIS** solicitó priorizar el debate y votación del Proyecto de Ley 133/2021-CR, que tiene por objeto modificar la Ley 29649, Ley que crea la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, así como del Proyecto de Ley 3747/2022-CR, que modifica el numeral 58.3 del artículo 58 de la Ley 30220, Ley Universitaria.

Por otro lado, comentó que diversos grupos organizados han expresado su preocupación por el inicio de las clases escolares en la Institución Educativa N° 601660, que brinda servicio educativo en la comunidad nativa Grau, Señor de los Milagros, Independencia, ubicada en Maynas en la región Loreto. Informó que ya se ha solicitado a la Defensoría del Pueblo la protección correspondiente a los estudiantes afectados por el desalojo realizado por la Marina de Guerra del Perú a raíz de un conflicto social. Pidió que, como parte de los temas a informar por el ministro de Educación, se incluya la situación de las escuelas que brindan el servicio educativo a las comunidades indígenas y nativas.

La congresista **PAREDES FONSECA** pidió que se solicite un informe al ministro de Educación sobre el inicio de las clases escolares 2023, la infraestructura educativa, contratación docente y distribución de materiales educativos. Asimismo, solicitó, a través de la presidencia, que el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informen sobre las acciones tomadas respecto de la situación de las adolescentes que se encuentran en edad escolar y en estado de gestación.

También solicitó agendar las propuestas de ley 528/2021-CR, 2408/2021-CR y 2409/2021-CR para que sean dictaminadas por la Comisión.

El congresista **MONTALVO CUBAS** solicitó la acumulación del Proyecto de Ley 1914/2021-CR en el predictamen recaído en los Proyectos de Ley 1421/2021-CR, 1945/2021-CR, 2136/2021-CR, 2511/2021-CR y 3140/2022-CR, al considerar que se tratarían de materias relacionadas.

El congresista **QUISPE MAMANI** manifestó que, en el marco del inicio de clases escolares, el Ministerio de Educación no ha tomado acción para darle certeza a los docentes sobre la continuidad de sus labores en sus respectivos centros educativos,

lo cual, finalmente, termina afectando a los estudiantes, sobre todo en los institutos superiores.

El congresista **PAREDES GONZALES** solicitó dar atención a los oficios remitidos a la Comisión para sustentar y agendar dictámenes de diversos proyectos de ley de su autoría.

El congresista **MARTICORENA MENDOZA** solicitó que se realicen las gestiones tendientes a agendar en el Pleno del Congreso el dictamen que declara de interés nacional la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha.

La **PRESIDENTA** manifestó que uno de los temas que se pide que el ministro de Educación informe es el relacionado con la modificación de las resoluciones viceministeriales del concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial, lo cual ha merecido el envío de oficios por parte del congresista Paul Gutiérrez Ticona. Sobre ello, informó que el Ministerio de Educación ya ha remitido la respuesta correspondiente y que dicha información sería compartida con el congresista Gutiérrez Ticona y con aquellos que lo soliciten para su revisión. Añadió que, sin perjuicio de ello, el referido tema sería un punto que el ministro de Educación deberá informar en la sesión en la que sea invitado, así como todos los demás temas mencionados.

Dijo que todos los puntos señalados son merecedores de la atención del titular del sector, para lo cual dispuso que se incluya en la Orden del Día el pedido de invitarlo a una próxima sesión.

De otro lado, señaló que los proyectos de ley 133/2021-CR y 3464/2021-CR, de autoría de los congresistas Juan Carlos Mori Celis y Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo, respectivamente, ya están siendo trabajados por la comisión. Respecto de las demás iniciativas legislativas señaladas por los congresistas en sus intervenciones, manifestó que serán incorporadas para las próximas sesiones.

Por otro lado, comunicó que en reuniones sostenidas con docentes y asistentes de taller en condición de contratados de distintos institutos y escuelas de educación superior, así como de los Centros de Educación Técnico Productivos, se ha puesto en conocimiento sobre la preocupación por la falta de concursos públicos de nombramiento en los últimos años. Al respecto, señaló que indicaron que existen las iniciativas legislativas 1278/2021-CR y 3832/2022-CR que tratan de encontrar una solución a dicha problemática y que versan sobre materia de especialidad de esta comisión ordinaria, sin embargo han sido decretadas únicamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, por lo que corresponde tomar un acuerdo para solicitar al Consejo Directivo que los referidos proyectos de ley sean decretados a nuestra comisión.

Sobre el particular, el congresista **PAREDES GONZALES** señaló que la iniciativa legislativa 3832/2022-CR fue aprobado en la última sesión de la Comisión de Presupuesto, asimismo, dijo que el proyecto de ley 1278/2021-CR será puesto en agenda de la próxima sesión de dicho grupo de trabajo. Por lo expuesto, dijo que solicitar el decreto de dichas iniciativas a la Comisión de Educación ralentiza el avance que se puede lograr en favor de los grupos afectados, toda vez que en la situación en la que se encuentran ahora, solo queda pendiente su aprobación en el Pleno del Congreso.

La **PRESIDENTA** se mostró de acuerdo con la posición del congresista Paredes Gonzales y, en consecuencia, señaló que no se consultaría el pedido para solicitar la derivación de las iniciativas legislativas antes citadas a la Comisión.

El congresista **CRUZ MAMANI** solicitó el apoyo de los señores congresistas con su voto a favor de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto cuando sean debatidos en el Pleno del Congreso.

El congresista **PAREDES GONZALES** precisó que se ha trabajado con plazas orgánicas y presupuestadas y lo que cambiaría es la condición jurídica y laboral de los docentes, que pasarían de ser contratados a ser nombrados.

III. ORDEN DEL DÍA

La **PRESIDENTA** anunció que corresponde escuchar al congresista Wilson Soto Palacios, quien sustentará el Proyecto de Ley 3517/2022-CR, de su autoría, en virtud del cual se propone la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de la "Universidad Nacional Autónoma del Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro – UNAVRAEM".

Con dicha finalidad, le otorgó el uso de la palabra.

El congresista **SOTO PALACIOS** señaló que el proyecto de ley busca garantizar el derecho a la educación superior universitaria de los estudiantes de las zonas del VRAEM, que comprende los departamentos de Ayacucho, Cusco, Apurímac, Huancavelica y Junín; así como, materializar el cumplimiento del artículo 6 de la Ley Universitaria para fomentar la investigación científica en los jóvenes que, por falta de oportunidades, al concluir su formación secundaria ven truncado su proyecto de vida.

Sostuvo que en la zona del VRAEM es una con fuerte presencia militar, con población en pobreza y pobreza extrema que no tienen la oportunidad de acceder

a educación superior universitaria, dado que las universidades más cercanas se encuentran en los distritos capital de las regiones que conforman el valle.

Agregó que el proyecto de ley encuentra su marco legal en los artículos 13 y 18 de la Constitución Política del Perú, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el expediente 853-2015-PA/TC del Tribunal Constitucional.

Dijo que la aprobación del proyecto de ley no representa gastos adicionales al erario nacional al tratarse de una ley declarativa; sin embargo, su implementación, a cargo del Poder Ejecutivo permitirá materializar el derecho de los estudiantes a la igualdad y educación sin discriminación.

La **PRESIDENTA** agradeció la presentación realizada y sugirió al congresista Soto Palacios realizar las gestiones de coordinación correspondientes con los congresistas Margot Palacios Huamán y Guido Bellido Ugarte, autores de los proyectos de ley 1049/2021-CR y 1565/2021-CR, respectivamente, que crean la Universidad Nacional del VRAEM. Señaló que está pendiente definir el lugar en el que estaría ubicada la universidad, por lo cual agradeció se tome un acuerdo para concluir la elaboración del predictamen.

El congresista **ELÍAS ÁVALOS** dijo que sería necesario emitir una norma o una disposición complementaria a la Ley 30220, Ley Universitaria, en la que se establezca que los Gobiernos Regionales pueden disponer de los ingresos provenientes del canon para la adquisición de bienes o infraestructura que permita darle viabilidad a la implementación de las universidades que se crean mediante ley.

Sugirió que para ello se realice una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de dar con una propuesta legislativa viable legal y económicamente.

Por otro lado, dijo que es importante tener en cuenta que las universidades deben estar ubicadas en zonas en las que puedan contar con un alumnado permanente, personal administrativo y docentes nombrados a tiempo completo, al menos en un 25%.

No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún otro señor congresista, la **PRESIDENTA** dio por agotado el debate y anunció que la iniciativa de ley continuaría con el trámite de Reglamento.

—o0o—

Seguidamente, la **PRESIDENTA** anunció que corresponde escuchar a la congresista María Elizabeth Taipe Coronado, quien sustentará el Proyecto de Ley 1919/2021-CR, de su autoría, en virtud del cual se propone la Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la implementación de techos en los espacios abiertos de los centros de educación básica regular del país.

Con dicha finalidad, le ofreció el uso de la palabra.

Iniciando su exposición, la congresista **TAIPE CORONADO** señaló que su propuesta legislativa tiene por objeto declarar de interés nacional y necesidad publica la implementación de techos en los espacios abiertos de los centros de educación básica regular del país, a fin de garantizar las actividades al aire libre desarrolladas por los estudiantes de inicial, primaria y secundaria, en el marco de sus actividades educativas.

Dijo que la infraestructura de las instituciones de educación básica en el país no cuenta con techos en sus espacios abiertos, propicios para el desarrollo de actividades que los estudiantes realizan como parte de su jornada escolar diaria, exponiéndolos a altas temperaturas, lo cual pone en riesgo su salud.

Añadió que la aprobación del proyecto de ley sustentado beneficiaría a miles de estudiantes, protegiéndolos de los daños que puede ocasionar la radiación solar.

Culminada la presentación, la **PRESIDENTA** comentó que un informe del PRONIED señala que en el numeral 12.18, literal f), de la norma técnica "Criterios generales de diseño para infraestructura educativa", aprobada con Resolución Ministerial N° 010-2022-MINEDU, se dispone considerar áreas cubiertas en salvaguarda de la salud de los estudiantes, según lo señalado en la Ley 30102, así como en la norma técnica denominada "Disposiciones para la adopción de medidas preventivas frente a los efectos noscivos a la salud por la exposición prolongada a la radiación solar en instituciones públicas y privadas de la educación básica, técnico productiva, superior, tecnológica, pedagógica y artística", aprobada por Resolución 368-2017-MINEDU.

Dijo que lo que se pretende aprobar mediante el proyecto de ley sustentado ya se encontraría regulado adecuadamente, por lo que carecería de objeto aprobar nuevamente una norma declarativa que tiene el mismo fin; sin embargo, sostuvo que sí corresponde verificar el cumplimiento de lo dispuesto por el marco normativo expuesto.

La congresista **TAIPE CORONADO** dijo que, en efecto, hay un marco normativo que dispone cubrir las áreas expuestas a la radiación solar; sin embargo, en las

visitas realizadas a los centros educativos, se ha constatado que dicha disposición no se está cumpliendo, acotó.

La **PRESIDENTA** señaló que se pediría un informe a fin de conocer el estado real del cumplimiento de dicha norma.

Finalmente, anunció que el proyecto de ley seguirá con el trámite de Reglamento.

—o0o—

A continuación, la **PRESIDENTA** manifestó que, conforme a la agenda del día era turno de escuchar a la congresista Cheryl Trigozo Reátegui, para que sustente el Proyecto de Ley 2608/2021-CR, de su autoría, en virtud del cual se propone la Ley que declara de interés nacional y necesidad pública incorporar el curso electivo de lengua de señas en las universidades públicas y privadas. Al respecto, anunció que, mediante el Oficio 906-2022-2023-CHTR/CR, la citada congresista se excusó de asistir a la presente sesión y ha solicitado su reprogramación; en ese sentido, procedió conforme a lo solicitado.

—o0o—

Seguidamente, la **PRESIDENTA** indicó que corresponde debatir y votar el predictamen recaído en los proyectos de ley 1421/2021-CR, 1945/2021-CR, 2136/2021-CR, 2511/2021-CR, 2902/2022-CR y 3140/2022-CR, en virtud del cual se propone la Ley que promueve la inserción laboral de los graduandos de las universidades públicas y privadas en el mercado laboral a través de la promoción de la investigación tanto para la obtención del grado académico de bachiller como del título profesional.

Respecto de la derogación de la obligatoriedad de realización de trabajo de investigación como requisito para la obtención del grado de bachiller, propuso que se establezca una disposición que permita a las universidades adecuar su malla curricular para la inclusión de un curso de elaboración de tesis, como parte de los años de estudio, siendo que la aprobación de dicho curso significaría la obtención del grado de bachiller.

Desestimó la propuesta de permitir que el graduando obtenga el grado académico de bachiller en una determinada universidad y la licenciatura en otra, debido a que dicha medida fue implementada de manera excepcional en razón del Decreto Legislativo 1496.

Así también, refirió que no existe la obligación de los graduados en universidades extranjeras de tramitar el reconocimiento del título ante la SUNEDU, por lo que la

propuesta de regular el ejercicio de la profesión de toda persona natural que ostente un diploma extranjero mediante la creación de un programa de complementación para la habilitación profesional por parte del citado ente supervisor, no es de recibo.

Concluyó que la fórmula legal presentada en el predictamen busca la armonización de la Ley 30220, Ley Universitaria, y de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. En ese sentido, solicitó el voto aprobatorio de los señores congresistas.

Luego de que el secretario técnico diera lectura al texto sustitutorio, a su solicitud, ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas.

En debate el predictamen, la congresista **RAMÍREZ GARCÍA** señaló que la propuesta busca encargar a la SUNEDU determinar los criterios y supervisar el procedimiento administrativo para el reconocimiento de los grados y títulos otorgados en el extranjero. Por otro lado, comentó que actualmente la gran mayoría de mallas curriculares cuenta con un curso en el que el estudiante logra plantear su proyecto de investigación; sin embargo, señaló que sería importante especificar la inclusión del curso "Elaboración del trabajo de investigación" para coadyuvar a los estudiantes a obtener el grado de bachiller y posterior título profesional.

La congresista **HERRERA MEDINA** dijo que es importante considerar que hay diferentes tipos de investigaciones, por lo que sugirió precisar que esta disposición sea efectiva para el pregrado. Manifestó que también se deben reevaluar los parámetros básicos aceptados para las investigaciones, toda vez que actualmente son bajos.

El congresista **GUTIÉRREZ TICONA** informó que solicitó la acumulación del Proyecto de Ley 4127/2021-CR, de su autoría, al predictamen recaído en los proyectos de ley 1421/2021-CR y otros. Seguidamente, dio lectura a un texto sustitutorio propuesto respecto del referido predictamen, en el sentido de incluir a los institutos de educación superior.

La **PRESIDENTA** explicó que el artículo 15 de la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, establece los requisitos mínimos para la obtención del grado; no obstante, la propuesta planteada en el predictamen busca modificar el artículo 45.1 de la Ley Universitaria; en consecuencia, anunció que la propuesta del congresista Gutiérrez Ticona tendría que ser estudiada de manera independiente.

El congresista **GUTIÉRREZ TICONA** solicitó que el predictamen pase a un cuarto intermedio para poder abordar una solución.

El congresista **REVILLA VILLANUEVA** indicó que es complicado completar un trabajo de investigación, más aun cuando ahora la Ley Universitaria exige la doble titulación para los estudiantes, por lo cual, solicitó el voto a favor de los señores congresistas, toda vez que la aprobación del predictamen facilitará a los estudiantes la obtención del grado de bachiller y, posteriormente, el título profesional.

El congresista **MARTICORENA MENDOZA** dijo que la investigación es uno de los puntos más débiles del sistema universitario y esta debe ser fomentada, no solo para los estudiantes sino también para los docentes.

La congresista **RAMÍREZ GARCÍA** reiteró que el curso de investigación, que tiene diferentes denominaciones en cada institución educativa, tiene por objeto que el estudiante tenga una tesis al finalizar la carrera y quede pendiente solo la elaboración de tesis para la obtención del título profesional. Indicó que al haber una necesidad se puede generar una oferta que mercantilice la investigación.

La **PRESIDENTA** precisó que la propuesta busca, en efecto, que el estudiante haya aprobado sus estudios de pregrado y el trabajo de investigación, además de tener conocimientos de un idioma extranjero.

Sobre el pedido del congresista Montalvo Cubas de acumular el Proyecto de Ley 1914/2021-CR, de su autoría, indicó que la materia de la iniciativa legislativa es distinta a la que se trata en el predictamen; sin embargo, dispuso que siga con su trámite de reglamento y se acumule con los otros proyectos de ley que versan sobre el docente investigador en la Carrera Pública Magisterial.

El congresista **MONTALVO CUBAS** reiteró su solicitud debido a que el texto sustitutorio de su proyecto de ley propone modificar el mismo artículo normativo que el predictamen. En ese sentido, solicitó que el predictamen pase a un cuarto intermedio para evaluar la incorporación de su propuesta.

La **PRESIDENTA** precisó que el proyecto de ley modifica la Ley 30512, mientras que el dictamen realiza modificaciones a la Ley 30220, Ley Universitaria. Sin embargo, en atención a lo solicitado, accedió hacer una revisión de las propuestas y dispuso que el predictamen pase a un cuarto intermedio.

La congresista **HERRERA MEDINA** solicitó que se reconsidere el requisito de conocimiento de una lengua extranjera para obtener el grado de bachiller, toda vez que las circunstancias económicas son distintas para todos los estudiantes y no se debe establecer obligatoriedad respecto de algo que requiere asumir un costo adicional a los estudios universitarios. Sugirió que dicho requisito sea dispuesto para obtener el grado de maestría.

La **PRESDIENTA** acogió la propuesta y señaló que se evaluaría dicho punto para la versión final del predictamen. No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún otro señor congresista, dio por agotado el debate y dispuso que el predictamen pase a un cuarto intermedio.

—o0o—

A continuación, la **PRESIDENTA** anunció que corresponde debatir y votar el predictamen negativo recaído en los proyectos de ley 369/2021-CR, 370/2021-CR, 1951/2021-CR, 2839/2022-CR y 3521/2022-CR, en virtud del cual se propone la Ley que modifica la Ley 29837, Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo.

Al respecto, señaló que las propuestas contenidas en los proyectos de ley acumulados buscan modificar el artículo 2 de la Ley 29837, disposición que no resulta atendible dado que el financiamiento de los trámites correspondientes a la obtención del título profesional y el costo que genera ello también está cubierto por la ayuda económica, de acuerdo con el literal e) del artículo 5 del Reglamento de la citada ley. Asimismo, manifestó que se propuso la modificación de los incisos 3.1 y 3.2 del artículo 3 de la Ley 29837 para que el financiamiento de las becas sea, de manera preferente, en universidades públicas; sobre ello, se precisa que lo dispuesto vulnera la libertad de cada estudiante de elegir la carrera y la universidad de su preferencia para cursar estudios.

Por otro lado, indicó que se propuso reemplazar la frase "bajos recursos económicos" por "no contar con recursos económicos"; sin embargo, explicó que dicha modificación no es viable dado que no se ha expuesto el sustento necesario para realizar dicho cambio y que el término "bajos recursos económicos" se encuentra definido en el literal c) del artículo 5 del Reglamento de la Ley que crea el PRONABEC.

Además, respecto de la propuesta de recibir una bonificación en concursos públicos de méritos para una plaza laboral en el Estado por haber sido becario, señaló que dicha disposición resulta inviable por vulnerar el principio de igualdad, oportunidades y mérito, y precisó que la Ley 31533 ya dispone otorgar el 10% de bonificación para postulantes menores de 29 años de edad.

Finalmente, mencionó la Disposición Complementaria Final en la Ley 29837 que busca establecer una distribución de los recursos del PRONABEC en 60%, 20% y 20% para becas de pregrado, posgrado y crédito educativo, respectivamente. Explicó que dicha medida no es atendible dado que no se evidencia el fundamento que haga necesario implementar dicha distribución, más aún cuando el PRONABEC ha demostrado ejecutar el 98,2% de su presupuesto, evidenciando un manejo

prudente de sus recursos. Agregó que el 12 de enero de 2023 el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad una norma que dispone que el PRONABEC destine un porcentaje de sus becas para financiar la permanencia y culminación de los estudios superiores a favor de los jóvenes estudiantes que continúen afectados económicamente por la COVID-19.

Por los puntos señalados, dijo que la Comisión recomienda la no aprobación de los proyectos de ley 369/2021-CR, 370/2021-CR, 1951/2021-CR, 2839/2022-CR y 3521/2022-CR, y sugirió su remisión al archivo.

A continuación, ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas.

En debate el predictamen, el congresista **PAREDES GONZALES** solicitó la desacumulación de los proyectos de ley 369/2021-CR y 370/2021-CR, por cuanto, señaló, no guardan relación con la materia de las demás iniciativas legislativas.

Al respecto, la **PRESIDENTA** detalló que lo propuesto en los proyectos de ley 369/2021-CR y 370/2021-CR ya se encuentra regulado por la Ley 23585, que dispone que estudiantes de planteles y universidades particulares que pierdan a sus padres o tutores tienen derecho a beca. En ese sentido, señaló que no se encuentra fundamento suficiente para retirar los referidos proyectos de ley del predictamen.

No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún otro señor congresista, dio por agotado el debate y sometió a votación el predictamen en sus mismos términos.

El predictamen fue aprobado por unanimidad de los congresistas asistentes.

"Votación del predictamen recaído en los proyectos de ley 369/2021-CR, 370/2021-CR, 1951/2021-CR, 2839/2022-CR y 3521/2022-CR

Congresistas que votaron a favor: Echaíz de Núñez Izaga, Quispe Mamani, María del Pilar Cordero Jon Tay[3], Huamán Coronado, Infantes Castañeda, Ramírez García, Cruz Mamani, Rivas Chacara[4], Paredes Fonseca[5], Chiabra León[6], Paredes Gonzales, Gutiérrez Ticona, Herrera Medina, Elías Ávalos, Medina Minaya[7], Marticorena Mendoza y Pablo Medina (miembros titulares), y Revilla Villanueva[8] (miembro accesitario)".

—o0o—

[3] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[4] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[5] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[6] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[7] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[8] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.

A continuación, la **PRESIDENTA** anunció que corresponde debatir y votar el predictamen recaído en los Proyectos de Ley 2983/2022-CR y 3192/2022-CR, en virtud del cual se propone la Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación de la Universidad Nacional de Huancabamba en la provincia de Huancabamba, en el departamento de Piura.

Al respecto, sostuvo que la iniciativa normativa ha logrado establecer vinculaciones entre la creación de la referida casa de estudios y las políticas del Acuerdo Nacional; sin embargo, no atiende aspectos necesarios para la creación de una universidad, como establecer un sustento referido a la demanda laboral en la zona, analizar otras opciones como fortalecer la oferta educativa existente a través de la creación de filiales u otras modalidades de estudio.

Añadió que la iniciativa legislativa ha logrado visibilizar la urgente problemática a resolver en la provincia de Huancabamba, por lo que señaló que la declaración de de interés nacional y necesidad pública de la creación de la Universidad Nacional de Huancabamba inicia la construcción de un marco legal orientado al estudio de los requerimientos de infraestructura necesarios para la construcción de la sede de dicha universidad. Además, expuso otros beneficios que conlleva la creación de una nueva institución de educación superior, como la reducción de la brecha entre la demanda laboral y la oferta de profesionales respecto de la actividad minera en la localidad, precisando que coadyuva al cumplimiento del Objetivo Prioritario 1 de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva y asegura la calidad de la educación universitaria al incluir la participación de la SUNEDU.

Finalmente, recomendó la aprobación del predictamen en sus términos.

Seguidamente, ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas.

En debate, el congresista **REVILLA VILLANUEVA** señaló que el tiempo que demanda llegar a la provincia de Huancabamba es de entre cinco y siete horas, por lo que consideró justo la creación de una universidad en la misma localidad.

Comentó que la Municipalidad Provincial de Huancabamba y el Gobierno Regional de Piura no han ejecutado, en conjunto, más de 580 millones de soles en el año 2022, de los cuales 170 millones han sido devueltos al erario público. Sugirió que el Ministerio de Economía y Finanzas realice los estudios técnicos correspondientes para darle buen fin a dichos recursos. En ese sentido, solicitó el voto favorable de los señores miembros de la Comisión.

El congresista **MARTICORENA MENDOZA** sugirió que se consulte la disposición de las autoridades que conforman el Gobierno Regional y Municipal de la zona para

realizar las acciones de coordinación correspondientes a fin de hacer efectiva una norma declarativa.

En una nueva intervención el congresista **REVILLA VILLANUEVA** comentó que, en efecto, se cuenta con la disposición de las autoridades y la población para sumar esfuerzos y lograr la implementación de la Universidad Nacional de Huancabamba.

No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún otro señor congresista, la **PRESIDENTA** dio por agotado el debate y sometió el predictamen al voto en sus mismos términos.

El predictamen fue aprobado por mayoría.

"Votación del predictamen recaído en los proyectos de ley 2983/2021-CR y 3192/2022-CR

Congresistas que votaron a favor: Echaíz de Núñez Izaga, Quispe Mamani, María del Pilar Cordero Jon Tay[9], Huamán Coronado, Infantes Castañeda, Ramírez García, Cruz Mamani, Paredes Fonseca[10], Chiabra León[11], Paredes Gonzales, Gutiérrez Ticona, Herrera Medina, Elías Ávalos, Medina Minaya, Marticorena Mendoza y Pablo Medina[12] (miembros titulares), y Revilla Villanueva (miembro accesitario).

Congresista que votó en contra: Rivas Chacara[13] (miembro titular)".

—o0o—

Seguidamente, la **PRESIDENTA** anunció que corresponde debatir y votar el predictamen recaído en los proyectos de ley 374/2021-CR y 1423/2021-CR, en virtud del cual se propone la Ley que incorpora a los docentes civiles de las instituciones de educación superior del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior a la carrera docente universitaria.

Al respecto, sostuvo que la Ley 30512 excluye a las Escuelas de Oficiales y Escuelas Superiores del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior y, de igual forma, no se encuentran comprendidos en la Ley 30220, Ley Universitaria. Por tanto, agregó, las citadas instituciones se rigen por sus respectivas leyes de creación.

[9] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[10] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[11] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[12] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[13] Registró su voto en contra a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.

Por otro lado, hizo mención a que en dichas escuelas se cuenta con docentes que son miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, así como docentes civiles, los cuales deben ser incorporados al régimen de la carrera universitaria docente. En ese sentido, indicó que la propuesta resulta atendible, más aún cuando estos docentes cumplen con las exigencias que señala la Ley Universitaria.

Respecto de la incorporación de la Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" al sector Educación, señaló que la propuesta es inviable toda vez que dicha institución ha estado ligada siempre al sector Defensa y las carreras que se imparten requieren la participación necesaria de la Marina de Guerra del Perú como Oficial de Cubierta.

Finalmente, manifestó que se atendió el pedido de desacumulación efectuado por el congresista José Luis Elías Ávalos, autor del Proyecto de Ley 2089/2021-CR, no obstante que la iniciativa en referencia versaba sobre materias relacionadas con las del presente predictamen.

A continuación, ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas.

En debate, el congresista **ELÍAS ÁVALOS** felicitó el trabajo de la comisión y agradeció la desacumulación del Proyecto de Ley 2089/2021-CR, toda vez que —según dijo— no guarda relación con la materia de los otros proyectos de ley que han sido incluidos en el predictamen. Refirió que en el texto sustitutorio contenido en el predictamen no se ha incluido ningún elemento correspondiente a la iniciativa legislativa de su autoría. Solicitó que en la próxima sesión se presente el predictamen recaído en referido proyecto de ley.

El congresista **MARTICORENA MENDOZA** precisó que el ingreso a la docencia universitaria es por concurso público. Solicitó que se remita el texto legal del predictamen a su despacho, toda vez que la iniciativa que busca pasar a docentes de las Fuerzas Armadas y la PNP a la carrera docente universitaria implica, entre otras cosas, un desembolso del Estado para otorgar las remuneraciones y los beneficios correspondientes a los docentes. Adelantó que su voto sería en abstención debido a que no tiene conocimiento pleno de los fundamentos que respaldan la propuesta.

El congresista **PAREDES GONZALES** señaló que hay un compromiso con todos los docentes del país, en especial con aquellos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Reiteró la importancia de uniformizar el régimen de estos docentes con el del resto de docentes universitarios.

En una nueva intervención, el congresista **ELÍAS ÁVALOS** sugirió que el predictamen pase a cuarto intermedio a fin de evaluar a profundidad la propuesta.

La **PRESIDENTA** dio lectura a la Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley Universitaria, en la que se detallan las escuelas de educación superior e instituciones que están facultadas para otorgar grados y títulos.

El congresista **MARTICORENA MENDOZA** señaló que no se puede disponer el ingreso a la Carrera de Docente Universitaria mediante una ley, sino que se debe pasar por concurso público.

La **PRESIDENTA** aclaró que, de acuerdo a sus normas internas, el personal docente de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como los docentes civiles de escuelas de educación superior pasarían, mediante concurso público de méritos, a obtener una plaza de docente universitario.

No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún otro señor congresista, dio el debate por agotado y sometió al voto el predictamen en sus mismos términos.

El predictamen fue aprobado por mayoría.

"Votación del predictamen recaído en los proyectos de ley 374/2021-CR y 1423/2021-CR

Congresistas que votaron a favor: Echaíz de Núñez Izaga, María del Pilar Cordero Jon Tay[14], Huamán Coronado, Infantes Castañeda, Ramírez García, Paredes Fonseca[15], Chiabra León[16], Paredes Gonzales, Gutiérrez Ticona, Herrera Medina, Elías Ávalos, Medina Minaya, Marticorena Mendoza y Pablo Medina (miembros titulares), y Revilla Villanueva[17] (miembro accesitario).

Congresistas que votaron en contra: Quispe Mamani, Cruz Mamani y Rivas Chacara[18] (miembros titulares)".

—o0o—

A continuación, la **PRESIDENTA** señaló que corresponde debatir y votar el predictamen recaído en los proyectos de ley 811/2021-CR, 1881/2021-CR, 2415/2021-CR, 2440/2021-CR, 2658/2021-CR, 3353/2022-CR y 3356/2022-CR, en virtud del cual se propone la ley que modifica el artículo 8 de la Ley 28036, Ley de

[14] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[15] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[16] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[17] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[18] Registró su voto en contra a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.

Promoción y Desarrollo del Deporte, y el artículo 2 de la Ley 27674, Ley que establece el acceso de deportistas de alto nivel a la administración pública.

Al respecto, indicó que se busca modificar la naturaleza del Instituto Peruano del Deporte, a fin que ya no sea un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Educación, sino que sea un organismo público descentralizado; sin embargo, esta disposición vulnera el artículo 28 y el principio de competencia de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como el principio de separación de poderes, toda vez que el IPD es un organismo público ejecutor, cuya reorganización, fusión, cambio de dependencia o adscripción se acuerdan por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

Asimismo, sostuvo que varias de las modificaciones propuestas en los proyectos de ley acumulados ya han sido acogidas en otras regulaciones, por lo cual resulta innecesario recoger sus planteamientos. Sin embargo, consideró que es importante precisar que el IPD, en su calidad de ente rector, está facultado para brindar asistencia técnica para las inversiones de infraestructura deportiva, para lo cual debe aprobar un Plan Estratégico. Por otro lado, recomendó la aprobación de la modificación respecto de la vigencia por 4 años de los Deportistas Calificados de Alto Nivel, periodo que se ha definido teniendo en cuenta el intervalo de tiempo en el que se realizan los eventos deportivos de alta competencia.

Luego de que, por indicación suya, el secretario técnico diera lectura al texto sustitutorio contenido en el predictamen, ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas.

No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún señor congresista, dio el debate por agotado y sometió al voto el predictamen en sus mismos términos.

El predictamen fue aprobado por unanimidad de los congresistas asistentes.

"Votación del predictamen recaído en los proyectos de ley 811/2021-CR, 1881/2021- CR, 2415/2021-CR, 2440/2021-CR, 2658/2021-CR, 3353/2022-CR y 3356/2022-CR

Congresistas que votaron a favor: Echaíz de Núñez Izaga, Quispe Mamani[19], María del Pilar Cordero Jon Tay[20], Huamán Coronado, Infantes Castañeda, Ramírez García, Cruz Mamani, Rivas Chacara, Paredes Fonseca[21], Chiabra León[22], Paredes Gonzales, Gutiérrez Ticona, Herrera Medina, Elías Ávalos, Medina Minaya,

[19] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[20] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[21] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[22] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.

Marticorena Mendoza y Pablo Medina (miembros titulares), y Revilla Villanueva[23] (miembro accesitario)".

—o0o—

A continuación, la **PRESIDENTA** señaló que corresponde debatir y votar el predictamen recaído en los proyectos de ley 1399/2021-CR, 1556/2021-CR, 1569/2021-CR, 1906/2021-CR, 3457/2022-CR, 3723/2022-CR, 3756/2022-CR y 4007/2022-CR, en virtud del cual se propone la Ley que modifica la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, a fin de fortalecer la prevención del acoso escolar.

Al respecto, manifestó que la propuesta de incorporar a un psicólogo en cada institución educativa no es de recibo por la insuficiencia de profesionales en psicología respecto del número de colegios en el país; sin embargo, consideró que la propuesta sería parcialmente viable estableciendo que los profesionales psicólogos puedan realizar el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud - SERUMS en instituciones educativas públicas, conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Educación.

Por otro lado, las propuestas de establecer sanciones a los directores, disponer la participación activa de padres de familia en materia relacionada a la prevención y acción sobre el acoso escolar, implementar señaléticas para la prevención del *bullying,* incorporar el acoso virtual y cyberbullying a las regulaciones que previenen la violencia escolar, facultar al director a establecer acciones de prevención del acoso escolar e incorporar un libro de registro de incidencias sobre violencia y acoso entre los estudiantes, ya han sido reguladas previamente, por lo que no sería viable incorporarlas a la fórmula legal presentada.

Sobre la propuesta de precisar que el uso de las cámaras de videovigilancia incluye la prevención del *bullying,* señaló que es de recibo y se propone modificar el artículo 1 del Decreto Lesgislativo 1218 que regula el uso de las cámaras de videovigilancia y se incorpora el artículo 14 a la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas.

Finalmente, explicó que no se acoge la propuesta de que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI sea facultado para imponer multas desde 01 hasta 10 UIT a quienes incumplan con lo desarrollado en el reglamento de la Ley 29719 en razón de que el INDECOPI tiene discrecionalidad para determinar el monto de las sanciones pecuniarias, que puede llegar a ser hasta 450 UIT.

[23] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.

Luego de que el secretario técnico diera lectura al texto sustitutorio, por indicación suya, ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas.

En debate, la congresista **UGARTE MAMANI** felicitó la labor realizada por la Comisión de Educación y expresó su preocupación por lo índices de violencia, en especial, entre niños y adolescentes, por su condición de vulnerabilidad. Comentó que desde el 15 de setiembre del 2013 al 31 de diciembre del 2022, mediante la plataforma "Sí Se Ve" del Ministerio de Educación, se ha registrado un total de 52 709 casos de violencia física, psicológica y sexual en las instituciones educativas; sin embargo, precisó que hay una cifra oculta que no ha sido registrada por el temor de las víctimas a efectuar sus respectivas denuncias.

Destacó la importancia de asumir un compromiso con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes mediante acciones que permitan brindarles una mejor calidad de vida. Seguidamente, pidió el voto favorable de los señores congresistas para la aprobación del predictamen en comentario.

La congresista **HERRERA MEDINA** manifestó estar de acuerdo con la propuesta de incorporar al profesional en psicología a las instituciones educativas a través del SERUMS, toda vez que este significaría un paso importante para lograr el bienestar de los estudiantes.

El congresista **MARTICORENA MENDOZA** señaló que muchas veces la conducta de los estudiantes es el reflejo de lo aprendido en los hogares, por lo cual sugirió que se destaque la participación de los padres de familia en las acciones pertinentes para la prevención del *bullying* escolar.

El congresista **PAREDES GONZALES** señaló que la intención de la propuesta había sido considerada en la Ley 29719 y dio un plazo hasta el año 2012 para la incorporación de un profesional en psicología en las instituciones educativas; sin embargo, no habiéndose logrado el objetivo, dijo que es importante plasmar las limitaciones de la realidad del país en la ley. Por lo expuesto, acogió el texto sustitutorio contenido en el perdictamen y solicitó el apoyo de los sectores Educación y Salud para la implementación efectiva de la ley.

El congresista **ELÍAS ÁVALOS** manifestó que en la gestión anterior de la Comisión de Educación se aprobaron leyes que disponían la incorporación de la asistenta social, nutricionista, enfermera; sin embargo, no se han considerado aspectos vinculados al número de profesionales en el país que podrían coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones.

Por otro lado, dijo que el auxiliar es uno de los elementos más importantes para el acompañamiento de los alumnos en su formación.

No habiendo solicitado la palabra ningún otro señor congresista, la **PRESIDENTA** dio por agotado el debate y sometió el predictamen al voto en sus mismos términos.

El predictamen fue aprobado por unanimidad de los congresistas asistentes.

"Votación del predictamen recaído en los proyectos de ley 1399/2021-CR, 1556/2021-CR, 1569/2021-CR, 1906/2021-CR, 3457/2022-CR, 3723/2022-CR, 3756/2022-CR y 4007/2022-CR

Congresistas que votaron a favor[24]: Echaíz de Núñez Izaga, Quispe Mamani, María del Pilar Cordero Jon Tay[25], Huamán Coronado, Infantes Castañeda, Ramírez García[26], Cruz Mamani, Rivas Chacara, Chiabra León, Paredes Gonzales, Gutiérrez Ticona, Herrera Medina, Elías Ávalos, Medina Minaya, Marticorena Mendoza y Pablo Medina (miembros titulares), y Revilla Villanueva[27] (miembro accesitario)".

—o0o—

La **PRESIDENTA** anunció que corresponde someter a votación invitar al ministro de Educación con la finalidad de que se sirva informar sobre las acciones adoptadas por el sector frente la proximidad del inicio de las clases escolares y de los institutos superiores tecnológicos, correspondientes al periodo lectivo 2023, asimismo sobre la infraestructura educativa, contratación docente, distribución de materiales educativos, entre otros aspectos de interés de la ciudadanía.

Con el fin de tomar sus sugerencias, ofreció el uso de la palabra a los señores congresistas.

El congresista **MARTICORENA MENDOZA** sugirió incluir el tema de la situación actual de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica.

La congresista **HERRERA MEDINA** solicitó incluir el tema relacionado a las Observaciones del presidente de la República a la Autógrafa de la Ley que dispone el otorgamiento de becas para la permanencia y culminación de estudios superiores en favor de los estudiantes que continúan afectados económicamente por los efectos de la pandemia del COVID-19.

El congresista **PAREDES GONZALES** solicitó que se incluya el tema de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y del

[24] Finalizada la sesión, la congresista Karol Ivett Paredes Fonseca, mediante Oficio 535-2022- 2023/KPF-CR, del 8 de febrero de 2023, dejó constancia de su voto a favor.
[25] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[26] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[27] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE).

No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún otro señor congresista, la **PRESIDENTA** sometió la propuesta al voto acogiendo las sugerencias señaladas.

La propuesta fue aprobada por unanimidad de los congresistas asistentes.

"Votación para invitar al ministro de Educación a una próxima sesión de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte

Congresistas que votaron a favor[28]: Echaíz de Núñez Izaga, Quispe Mamani, María del Pilar Cordero Jon Tay[29], Huamán Coronado, Infantes Castañeda, Ramírez García, Cruz Mamani, Rivas Chacara, Chiabra León, Paredes Gonzales, Gutiérrez Ticona, Herrera Medina, Elías Ávalos, Medina Minaya, Marticorena Mendoza y Pablo Medina (miembros titulares), y Revilla Villanueva[30] (miembro accesitario)".

—o0o—

Seguidamente, la **PRESIDENTA** sometió a consulta el acta de la presente sesión con dispensa de su lectura.

No habiendo ninguna oposición la dio por aprobada

—o0o—

IV. CIERRE DE LA SESIÓN

Después de lo cual, la **PRESIDENTA** levantó la sesión.

Eran las 20 horas y 9 minutos.

[28] Finalizada la sesión, la congresista Karol Ivett Paredes Fonseca, mediante Oficio 535-2022- 2023/KPF-CR, del 8 de febrero de 2023, dejó constancia de su voto a favor.
[29] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.
[30] Registró su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: ECHAIZ DE NUÑEZ IZAGA Gladys Margot FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/02/2023 11:07:42-0500

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: MORI CELIS Juan Carlos FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/02/2023 11:24:41-0500

.....
GLADYS MARGOT ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA
PRESIDENTA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTIUD Y DEPORTE

.....
JUAN CARLOS MORI CELIS
SECRETARIO
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, del periodo anual de sesiones 2022-2023, que elabora el Área de Transcripciones del Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta.